

FOJA: 1562 .- .-

**NOMENCLATURA** □□: 1. [40]Sentencia □□

**JUZGADO** □□□: 5° Juzgado Civil de Santiago

**CAUSA ROL** □□□: C-30037-2016

**CARATULADO** □□: MIRANDA / SERVIU METROPOLITANO

Santiago, seis de Mayo de dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

**A fojas 1, complementando su la demanda a fojas 55 (folio 6),** comparece doña Mónica Duarte Valenzuela, abogado, domiciliada para estos efectos en calle Mac Iver N° 484, oficina 51, Santiago, actuando en representación de doña Viviana Elisabeth Miranda Herrera, asesora de hogar, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 510; Nadia Jeannette Vergara Ávalos, secretaria, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 312; Romina Jeannette Vergara Carrasco, reponedora, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 524; Natalia Andrea Mendoza Riquelme, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 506; María Marcela Vives Valdés, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 315; Claudia Catherine Chavarría Saavedra, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 415; María Antonieta Huircal Trangolaf, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 514; Alejandra Andrea Rodríguez Huerta, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 401; Jessica Paola Vergara Ormazábal, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 212; Carolina Muñoz Moya, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 413; Paola Andrea Llorente Bahamondez, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 309; Sandra Viviana González Montecinos, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 110; Valeska Andrea Carrasco Vergara, podóloga,



domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 527; Evelyn Andrea Matus Jiménez, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 313; Alicia Julia Lizama Fuentes, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 210; Verónica de los Ángeles Cáceres Padilla, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 205; Teresita Jesús Corro Rojo, secretaria, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 412; Kattia Daniela Contreras Ramos, sicóloga, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 403; Shlomit Katherine Barrera Oyarzun, secretaria, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 101; Marcela Andrea Morales Aguirre, operaría de máquinas, domiciliada en calle Goycolea, N°467, dpto. 106; Gisselle Noelia Sarmiento Navarro, vendedora, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 307; Marjorie Jochabet Inostroza Martínez, secretaria, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 206; Rosa Karen Inzunza Vejar, técnico en alimentos, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 513; Yolanda Lomeli Ortiz, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 518; Carmen Gloria Gutiérrez Castro, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 214; Andrea Paulina Gatica Díaz, vendedora, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 527; María José Cardoza Cardoza, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 523; Ruth del Carmen Vidal Gallardo, vendedora, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 405; Elizabeth Andrea Avendaño Salazar, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 105; Ximena Andrea Campos Cáceres, garzona, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 516; Marlene del Carmen González Paredes, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 113; Katherine Soledad Carrasco Vergara, comerciante, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 501; María Cecilia Labarca González, dueña de casa, domiciliada en calle



Goycolea N°467, dpto. 203; María Elizabeth Núñez Martínez, modista, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 505; Patricio Iván Vergara Ormazábal, operario, domiciliado en calle Goycolea N°467, dpto. 207; Jessica Ivonne Vargas Vargas, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 530; Elena Albina Cancino Lizama, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 504; Jessica Johanna Navarro Jara, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 107; Lorena Aurora Riqueros Palma, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 515; Jessica Karin Dupre González, vendedora, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 525; Jocelyn Vanessa Catrinanco Martínez, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 519; Marjorie Vania Arenas Fredes, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 528; Carolina del Carmen Clavel Azar, promotora, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 502; Fernando Andrés Contreras Miranda, operario, domiciliado en calle Goycolea N°467, dpto. 204; Yessica Carolina Herrera Alarcón, técnico en atención de párvulos, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 526; Marcia Andrea Pino Rivera, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 104; Constanza Carolina Yáñez Muñoz, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 520; Adriana Beatriz Juárez Carrillo, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 102; Ana Luisa Campos Poblete, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 211; Marcela Melania del Carmen Palacios Henríquez, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 213; Mirta del Carmen Carvajal Droguett, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 201; Amanda Teresa Navarro Vergara, técnico en enfermería, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 111; Iris del Carmen Rojas Reyes, dueña de casa,



domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 411; Rosa Elena Vargas Flores, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 406; María Inés de las Mercedes Sandoval Otárola, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 208; Gloria Adela Betzabe Aguilar Olivares, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 511; Alba María Teresa Abarca González, secretaria, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 303; Jorge Alonso Villalobos Cornejo, comerciante, domiciliado en calle Goycolea N°467, dpto. 310; Ximena del Carmen Álvarez Fernández, auxiliar de aseo, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 517; Verónica del Carmen Gutiérrez Castro, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 112; Navia Fabiola Arenas Carrasco, auxiliar de enfermería, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 114; Lucila del Carmen Campos de la Fuente, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 314; Sandra María Agurto Cordero, técnico en computación, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 402; Mónica Isabel Martínez Salas, auxiliar, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 108; Sara Irene Chacón Valladares, coletera, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 202; Sylvia del Pilar Salazar Ramírez, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 103; Elena del Pilar Meliñan Ponce, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 308; Marizzella Luisa Galleguillos Martínez, modista, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 507; Silvia Vanessa Vera Henríquez, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 508; Gladys del Carmen Valverde Aroca, vendedora, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 311; Luz Eliana Contreras Valdivia, vendedora, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 414; Claudia Elizabeth Barraza Olmos, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 304;



Viviana del Pilar Cáceres Padilla, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 306; Paola Alejandra Carrasco Vergara, dueña de casa, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 503; Carol Gloria Cáceres Padilla, costurera, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 305; Carolina Bersezio Arancibia, reflexóloga, domiciliada en calle Goycolea N°467, dpto. 521; y del Condominio Vista Hermosa, representada legalmente por doña Katherine Soledad Carrasco Vergara, comerciante, ambos domiciliados en Av. Goycolea N° 467, todos de la comuna de La Cisterna, interponiendo demanda de indemnización de daños y perjuicios por falta de servicio en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, persona jurídica de derecho público, representado por don Luis Alberto Pizarra Saldía, ambos con domicilio en calle Serrano N° 45, piso 6, Santiago, y en contra de la Municipalidad de La Cisterna, persona jurídica de derecho público, representada por su alcalde don Santiago Rebolledo Pizarra, ambos con domicilio en AV. Pedro Aguirre Cerda N°161, La Cisterna, por las razones de hecho y de derecho que expone.

Indica que con fecha 25 de octubre de 2010, entre don Patricio Durán Elicer, mandante, en su calidad de representante legal de la entidad de gestión inmobiliaria social o Egis Creativa; don Alfredo Antonio Toledo Correa, representante legal de la empresa constructora Civil Works Ltda., el constructor; y don Claudio Moscoso Carvajal en su calidad de representante del grupo organizado Comité Para la Vivienda Vista Hermosa, se celebró contrato de construcción y mandato para Programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, conforme las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 174 de Vivienda y Urbanismo del año 2005 y sus modificaciones.



Explica que dicho programa de Vivienda Fondo Solidario estuvo destinado a prestar atención habitacional a familias que viven en condiciones de pobreza o indigencia, de acuerdo al Instrumento de Caracterización Socioeconómica, en el cual el Ministerio de Vivienda y Urbanismo participa otorgando subsidios habitacionales para su financiamiento y, en el caso de proyectos de construcción, efectuando la Inspección Técnica de Obras o contratándola por su cuenta y cargo.

Afirma que con fecha 3 de diciembre del año 2012 la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna emitió el certificado de recepción definitiva de obras de edificación del inmueble ubicado en Av. Goycolea N° 467-A y 467- B, de la comuna de La Cisterna.

Señala que con fecha 12 de noviembre de 2013 se emitió el oficio del encargado de Unidad de post venta del Serviu Metropolitano al Jefe de Departamento de Obras y Edificación de la Municipalidad, dando por concluida la etapa de post venta, estableciendo “supuestamente” que no existía a dicha fecha reclamo alguno posterior al cierre de la post venta.

Sostiene que por razones que su parte desconoce, y sólo ante la insistente presión ejercida por los propios beneficiarios del subsidio hacia el Serviu Metropolitano, recién durante el segundo semestre del año 2015 se firmaron las escrituras de compraventa de los departamentos del edificio ubicado en Av. Goycolea N°467, comuna de La Cisterna. Vale decir, transcurrieron tres años entre la entrega material de los departamentos a los vecinos y la firma de las escrituras de compraventa.

Expresa que a raíz del temporal que afectó a la Región Metropolitana en el mes de junio del año 2013, se hizo público el defectuoso estado en que se encontraba el Edificio Vista Hermosa, toda vez que en dicha oportunidad



distintos medios de comunicación difundieron los serios problemas que debieron soportar los propietarios del lugar. La lluvia y viento que afectó a la capital ocasionó variados perjuicios a los demandantes, entre otros, la voladura de techos en mal estado y filtraciones de las paredes exteriores e interiores, obligando a los vecinos a tener que cubrir con plásticos sus paredes y ventanas, colocar sacos de arena en los pasillos del edificio y en las puertas de entrada de sus departamentos, a fin de impedir el ingreso del agua que escurría hacia su interior.

Precisa que una somera vista a las imágenes que se difundieron en distintos noticieros de televisión en aquella oportunidad, así como nuevas imágenes difundidas en el año 2015 a raíz de otro temporal, permitirá al tribunal comprobar la mala calidad de las construcciones, lo que permitió que el agua ingresará no sólo por los techos, inundando los pasillos, sino a través de sus muros, provocando inundaciones, goteras y humedad en el interior de los departamentos, produciendo hongos en las paredes que se pueden apreciar hasta la fecha. Además, las inundaciones y pozas de agua que se forman en la entrada principal, patios laterales y traseros del edificio, han sido de tal magnitud que es imposible para los residentes salir o entrar del edificio sin mojarse cuando ocurren lluvias y temporales, ocasionando un menoscabo que los demandantes no están jurídicamente obligados a soportar. Al respecto se debe considerar que en el edificio viven muchos niños, quienes ven afectado a diario su desarrollo y crecimiento personal como consecuencia de las deficientes condiciones del lugar.

Arguye que la mala calidad de la construcción del Edificio Vista Hermosa se ve reflejada en los diversos episodios ocasionados por temporales



que los vecinos han debido soportar, y que a la fecha no han tenido solución alguna por parte de las demandadas de autos. A saber:

a. Mala calidad en las instalaciones de ventanas.

Indica que a simple vista se puede observar en distintos departamentos un descuadre de los vanos de las ventanas, lo que ha originado su caída y las consecuentes filtraciones. No se instalaron corta goteras, lo que provoca que el agua se devuelva hacia el interior de las viviendas.

b. Mala calidad en llaves de agua y calefones.

Afirma que en la mayoría de los departamentos hay dificultades para que escurra el agua caliente; otros derechamente no disponen de este recurso, ya que el calefón o no funciona o no tiene la fuerza necesaria para prender el motor del mismo.

c. Mala calidad de puertas de exterior y chapas instaladas originalmente.

Expresa que esto ha originado que en varios casos los demandantes hayan tenido que cambiarlas a su costo.

d. Tableros de luz sin protección, y oxidados por las lluvias.

Señala que este defecto de construcción ha supuesto durante todo el período en que los demandantes habitan el lugar un riesgo evidente de descarga eléctrica, con las trágicas consecuencias que esto puede ocasionar. Reitera que en el lugar viven y juegan en forma cotidiana muchos niños.

Agrega que a lo anterior se suma la existencia de tubos de plástico por medio de los cuales pasan los cables que llevan la luz a los pasillos del quinto piso, y que al estar expuestos a la intemperie se han ido quemando como consecuencia de su exposición al sol.

e. Grietas en las juntas de dilatación.





Manifiesta que en ellas es posible visualizar a simple vista material que separa los muros, como una especie de esponja y plumavit. Sumado a ello, el agua que cae en el lugar como consecuencia de la lluvia escurre de un piso a otro por dichos espacios, agravando la situación la circunstancia de que por muchas de ellas pasan los tubos que conducen electricidad a los departamentos. Las referidas juntas de dilatación no fueron selladas, o lo fueron en forma defectuosa.

f. Sala de basura en malas condiciones.

Expone que a simple vista se puede apreciar cómo las planchas del techo de la sala de basura están abiertas, sin sello, provocando inundaciones y filtraciones que tienen el lugar en pésimas condiciones.

g. Patio del edificio de tierra en desnivel y sin drenaje.

Indica que como primera característica hay que destacar que el patio del lugar está situado bajo el nivel del suelo en relación a construcciones colindantes, lo que ha provocado verdaderas “piscinas” de agua y barro como consecuencia de la lluvia, generando acumulación de humedad y suciedad en el primer piso (con el consecuente riesgo de infecciones).

Añade que, al no existir un sistema de drenaje, en variadas oportunidades el agua ha ingresado a los departamentos situados en el primer piso.

Precisa que, debido a las numerosas lluvias e inundaciones, la tierra del patio se ha ido removiendo, quedando a la vista el cemento de los muros de las construcciones colindantes, provocando en los vecinos el temor que los muros se derrumben, poniendo en riesgo su integridad física, en particular la de los niños que juegan cotidianamente en el patio.

h. Defectos en las tabiquerías.



Afirma que las tabiquerías se construyeron sin dar cumplimiento a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto original y que fueron presentadas a la DOM de la I. Municipalidad de la Cisterna.

Arguye que a simple vista se observa que todo el revestimiento exterior fue construido con hormigón celular, lo que ha generado innumerables filtraciones hacia las viviendas.

i. Deficiencias en los aleros del techo del edificio.

Señala que la constructora encargada del proyecto instaló simples aleros en el quinto piso del edificio, que apenas cubren el ancho del pasillo. Se trata de planchas de material ligero que en su gran mayoría se han volado como consecuencia del viento.

Agrega que la falta de un techo que cubra completo el edificio, ha ocasionado que como consecuencia de las lluvias escurra agua hacia el interior de los departamentos ubicados en el quinto piso.

j. Problemas en bombas y estanque del agua potable.

Expresa que ambas se instalaron a ras de piso, lo que generó que como consecuencia de las lluvias entrara barro en ellas.

Destaca que en reiteradas oportunidades se le pidió a la constructora que arreglara este desperfecto. El único arreglo efectuado fue levantar las estructuras con ladrillos, solución absolutamente insuficiente para proteger el agua potable. La excusa fue “el presupuesto no alcanza para más”.

k. Muros de los pasillos en bruto, sin revestimiento.

Sostiene que el Edificio Vista Hermosa se entregó en bruto, sin terminaciones, su fachada no cumple con los estándares técnicos exigidos, sin aislantes de humedad, con ventanas descuadradas, sin pintura, con las juntas de dilatación al descubierto, sin aleros adecuados en el techo para proteger el



edificio y sus pasillos, sin escaleras de emergencia ni escaleras que conecten con el techo, sin desagües en los patios para el escurrimiento del agua, entre otros desperfectos.

Manifiesta que las innumerables deficiencias técnicas de la construcción han ocasionado un evidente perjuicio a las noventa familias que viven en el lugar, y que han visto frustradas sus legítimas expectativas de contar con una vivienda digna, adquirida con el ahorro producido por su esfuerzo personal. Se trata del sueño de personas luchadoras, que buscan progresar y darles a sus familias un ambiente apropiado, y el mejor status al que les es posible acceder de acuerdo a sus capacidades.

Afirma que se debe considerar que la situación descrita es de responsabilidad de los Órganos del Estado demandados, los que han tenido una actitud descuidada en relación a las obligaciones que les impone la normativa legal y técnica que establece los estándares mínimos de calidad de construcción. Dicha circunstancia constituye una falta de servicio que ha significado un grave perjuicio a los propietarios y residentes de los departamentos del Edificio Vista Hermosa, derivado de la ausencia o deficiente fiscalización de los demandados respecto de las obras, de la inversión efectuada, de la inadecuada y deficiente calidad de los materiales utilizados, produciéndose una sumatoria de hechos que han conducido inevitablemente a un detrimento en el patrimonio de los demandantes.

Arguye que la circunstancia de tratarse de viviendas financiadas con fondos solidarios en caso alguno es razón suficiente para llevar a cabo el proyecto sin dar cumplimiento a los mínimos estándares técnicos y legales que rigen en nuestro país, más aun considerando que los propietarios aportaron al proyecto con su ahorro personal.



Indica que, ante esto, resulta absolutamente claro que como consecuencia de los defectos en la construcción de las viviendas y en la calidad de los materiales empleados en ella se han producido daños significativos, tanto por las reparaciones que se han tenido que hacer para mejorar en parte la calidad de vida de los actores, tanto por los daños producidos a la salud física y psíquica de los propietarios y sus familias. A ello se debe sumar los constantes problemas ocasionados principalmente por el frío, la humedad y la suciedad, todo lo que ha traído como consecuencia constantes enfermedades en niños y adultos mayores que viven en el lugar, e innumerables padecimientos psicológicos derivados del estrés y preocupación que las deficientes condiciones del lugar han generado en los habitantes.

En cuanto al derecho, sostiene que los demandantes, propietarios de departamentos del Edificio Vista Hermosa, accedieron a un subsidio habitacional con el fin de obtener una solución a sus necesidades de vivienda. La satisfacción de las mismas provino de un Programa de Vivienda Fondo Solidario I, destinado a prestar atención habitacional a familias que viven en condiciones de pobreza o indigencia, implementado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la normativa contenida en el Decreto Supremo N° 174 de dicho ministerio.

Indica que, en el ejercicio de sus funciones propias, el Estado - a través de sus órganos competentes - y de conformidad con la normativa contenida en el Decreto Supremo N° 174 que regula y fiscaliza el sistema de construcción de viviendas sociales, no sólo en lo relativo a la planificación y especificaciones técnicas generales de dichos proyectos, sino también en lo relativo al financiamiento de las viviendas a través del subsidio habitacional otorgado por el SERVIU. El sistema exige e impone a los órganos que



participan en él una participación permanente y activa en el control de gestión y de inversión de los fondos provenientes del erario nacional, gestiones que deben ser eficientes y eficaces conforme lo prescribe el artículo 10 de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado.

En cuanto a la responsabilidad del Estado, afirma que, por su actividad esencial, esto es la administrativa, aplicando y cumpliendo sus leyes, persigue en su esencia el fin último de conservación y seguridad que necesariamente debe redundar en beneficio de los administrados. Por lo tanto, los actos de la administración, que emanan de la soberanía, no pueden en ningún caso, dañar a los administrados, bajo sanción de tener que responder pecuniariamente por ello.

Respecto a las Bases de la Institucionalidad, señala que diversas normas consagradas en la Constitución Política de la República fundan el estatuto de responsabilidad patrimonial de los Órganos del Estado, citando los artículos 1 inc. 4, 4, 5° inc. final, 6, 7, 19 N° 2, 22, 24 y 38 inciso 2°.

Sostiene que esta última norma consagra el sistema de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que faculta a cualquier persona -natural o jurídica- que sea lesionada en sus derechos, demandar los perjuicios que haya experimentado como consecuencia de la actividad estatal, incluyendo no sólo el daño patrimonial, sino también el moral o de cualquier otro orden.

Manifiesta que el sujeto ofensor es la Administración del Estado, sus organismos o las municipalidades, es decir, la responsabilidad es amplia y comprende a todo ente público, sin exclusión de ninguna especie.

Arguye que la disposición en comento no establece limitaciones de ninguna especie en relación al tipo de actividad generadora de responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia



han entendido que no sólo abarca acciones sino también omisiones. En consecuencia, cualquier actividad que el Estado ejecute o deje de ejecutar y que lesione derechos de un sujeto configura su responsabilidad patrimonial.

Expresa que el perjuicio sufrido por los propietarios de departamentos del Edificio Vista Hermosa, ubicado en Av. Goycolea N° 467, comuna de La Cisterna, se origina en una deficiente actividad u omisión de los demandados, quienes han ocasionado una lesión antijurídica, pues se trata de un daño o menoscabo que se les ha irrogado sin estar en condiciones ni en la situación de soportarlo.

Respecto de las normas generales de responsabilidad contenidas en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, cita los artículos 2, 3, 4, 5, 11 y 44.

Respecto de las normas especiales contenidas en el D.L. N° 1.305 del año 1975 que establecen diversas obligaciones del SERVIU Metropolitano, cita los artículos 5, 12 letra g), 13 letras a), c), d), f)

Expresa que, contrastando los hechos expuestos en la demanda con las obligaciones que recaen sobre el SERVIU Metropolitano, queda de manifiesto la evidente falta de servicio en que incurrió dicho organismo al intervenir en el proyecto que culminó con la construcción del Edificio Vista Hermosa.

Sostiene que la sola circunstancia de existir en la actualidad el extenso catálogo de desperfectos antes descritos en el Edificio -mismos que han existido desde el primer día en que los demandantes ocuparon sus departamentos- ponen al descubierto la deficiente gestión de fiscalización y supervisión técnica en que incurrió el SERVIU Metropolitano.

Añade que la sola circunstancia de otorgar subsidios habitacionales - con fondos públicos provenientes del erario nacional- imponen al SERVIU



Metropolitano la obligación de ejercer un control permanente respecto de su inversión. De haber cumplido dicha obligación, el SERVIU Metropolitano habría evitado -o a lo menos disminuido- las desastrosas consecuencias que han generado en la vida de los demandantes los vicios de construcción materia de esta demanda.

Manifiesta que en todo Estado de Derecho rige el principio de control de legalidad y de gestión, imponiendo al órgano respectivo la necesidad de verificar la eficiencia y eficacia de la respectiva actividad.

Afirma que el control jerárquico está consagrado en el artículo 10° de la ley N° 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado.

Expone que en los hechos materia de la demanda las normas de control a que está sujeto el SERVIU Metropolitano no se cumplieron, o bien se cumplieron en forma deficiente. En caso contrario, los daños ocasionados a los demandantes no se habrían producido.

En cuanto a la responsabilidad de la Municipalidad de La Cisterna, cita las siguientes normas:

i) Normas contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículos 24 letra a), número 1, 2 y 3, letra b), artículo 152.

Arguye que la falta de servicio -creación jurídica francesa- consiste en la omisión o el funcionamiento defectuoso de éste, imputable en forma directa al poder público, que tiene a su cargo el servicio que origina el daño.

Agrega que en diversos fallos dictados por la Excma. Corte Suprema, el máximo tribunal ha calificado de objetiva la responsabilidad consagrada en el artículo 152 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en cuanto se prescinde en su configuración de la prueba del dolo o culpa del autor, imponiendo a la víctima sólo la prueba del daño causado.



Precisa que ninguna relevancia tiene la persona del funcionario para la determinación de la falta de servicio, ya que la responsabilidad recae en el servicio.

Explica que la falta de servicio surgió para explicar un tipo de responsabilidad referido exclusivamente al actuar del Estado que causa daño a los particulares. En consecuencia, no resulta procedente fundamentar la falta de servicio en las normas de responsabilidad extracontractual contenidas en el Código Civil. Cómo lo ha establecido de forma unánime la Excma. Corte Suprema, en materia municipal se trata de una especial forma de responsabilidad pública objetiva, que refleja el claro propósito del legislador de librar a la víctima del peso de la prueba del dolo o culpa en la responsabilidad por daños.

ii) Normas del D.F.L. N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo 5, artículo 9 letra a), artículo 119 y 142.

iii) Normas del D.S. N° 47, Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 y 5.2.6.

Indica que el estado actual del Edificio Vista Hermosa es el fiel y patente reflejo del incumplimiento, por parte de la Municipalidad demandada, de las obligaciones antes citadas, que recaen en ella como ente encargado de la fiscalización en el cumplimiento de la normativa técnica aplicable a la calidad de la construcción.

Añade que especial relevancia adquiere la obligación que recae sobre la Municipalidad establecida en el artículo 1 de la respectiva Ley Orgánica "... cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas". Lejos de dar cumplimiento a dicho imperativo, la intervención





defectuosa de la Municipalidad demandada en la construcción del Edificio Vista Hermosa constituyó una de las principales causas de los vicios en su construcción, y consecuentemente de los múltiples perjuicios ocasionados a los demandantes.

Expresa, a modo de ejemplo, que en la actualidad la Municipalidad demandada ni siquiera cuenta con todos los documentos que dan cuenta de los antecedentes técnicos de la construcción del Edificio Vista Hermosa, establecidos en la normativa técnica y legal que regula la materia. Cuestión que es de la máxima gravedad, pues resulta imposible verificar de forma completa las condiciones técnicas de su construcción y demás instalaciones.

En cuanto a los perjuicios demandados, señala que las viviendas de los propietarios del Edificio Vista Hermosa de La Cisterna, sufrieron serios perjuicios como consecuencia del sistema de construcción empleado, a todas luces ineficiente y defectuoso, fundamentalmente por cuanto sus paredes fueron ejecutadas mediante uso de hormigón celular en todas sus fachadas, como asimismo, las voladuras de aleros tanto exteriores como entre el edificio que no cubren los pasillos, provocando inundaciones y filtraciones hacia el interior de los departamentos, lo que a consecuencia de ello ha deteriorado en su gran mayoría muebles interiores y artefactos eléctricos, así como también, los pisos y cerámicas de algunos departamentos “literalmente” se han despegado debido a la humedad y el agua apozada.

Afirma que, sumado a lo anterior, todos los desperfectos en terminaciones, juntas de dilatación no selladas, ventanas descuadradas sin corta goteras- produciendo que el agua se devuelva hacia el interior de las viviendas en tiempos de lluvias-, conductores eléctricos a la vista, problemas en el agua caliente, patio sin pavimentar y sin desagüe de agua -provocando



una verdadera “piscina” que impide salir y entrar al edificio en tiempos de lluvias y temporales-, pasillos sin cerámicas, etc. Que a consecuencia de ello ha provocado humedad en las viviendas ocasionando una serie de enfermedades físicas (respiratorias) como psicológicas (stress, depresión, etc.) principalmente entre los niños y adultos mayores del edificio.

Indica que, conforme a ello, entonces, los gastos en que han incurrido los vecinos en arreglar sus viviendas de la mejor manera posible y solventar los gastos médicos durante todos estos años, a consecuencia de la mala calidad en la construcción de sus viviendas, se resume en los siguientes términos:

1.- Perjuicios por daño material por cada propietario del edificio Vista Hermosa ascienden a un 20% del precio de cada una de sus viviendas, valor que debe calcularse conforme las respectivas escrituras de adquisición de las mismas, en su equivalente en unidades de fomento, o índice del valor promedio en su caso, a la fecha de pago efectivo, o lo que el tribunal estime pertinente otorgar.

2.- Los gastos que ha debido incurrir el Condominio Vista Hermosa en realizar reparaciones en el edificio y espacios comunes, asciende a la suma de \$8.635.207.- por daño material, valor que se acredita según los documentos que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación, así como en la etapa procesal correspondiente.

3.- En cuanto al daño moral, expresa que la mala construcción y la “mala publicidad” que tiene el Condominio Vista Hermosa a raíz de aparecer en distintos programas de televisión, han producido un tremendo malestar y vergüenza en los vecinos del edificio, ya que al ser conocidos como “Los Colina I de La Cisterna” se ven claramente perjudicados y discriminados.



Agrega que la desesperación y frustración sufrida por cada uno de ellos al ver en carne propia la inadecuada e ineficiente construcción del bien máspreciado, en que se supone es para toda la vida, y del cual uno lucha por obtener a fin de asegurar a su familia e hijos, ese dolor de pena, rabia, frustración, desesperación, desaliento, abandono, humillación, entre muchos otros calificativos a ese sentimiento de desazón, no puede ser inferior a 300 unidades de fomento para cada una de las familias (dueños de cada departamento) por concepto de daño moral, o lo que el tribunal estime pertinente, más intereses y costas.

Precisa que el valor de la UF es el correspondiente al día de la presentación de la demanda con fecha 9 de diciembre de 2016, esto es, \$26.329,30.37

Añade que el valor total de cada uno de los departamentos por familia es UF 710, y que el 20% de UF 710 es UF 142, que equivale a \$3.738.761.-

Señala a su vez que los demandantes en la presente causa son 76, por lo que el daño material sufrido por la totalidad de los demandantes del edificio Vista Hermosa asciende a la suma de \$ 284.145.836.-

Manifiesta a su vez que los gastos en que ha debido incurrir el Condominio Vista Hermosa por concepto de daño material asciende a la suma de \$8.635.207.-

Por último, indica que el daño moral sufrido por cada uno de los demandantes asciende a la suma de UF 300, que en su conversión a pesos al momento de la presentación de la demanda asciende a \$7.898.790.-, por demandante; por ende, el monto total por daño moral asciende a \$600.308.040.-



Precisa que el valor total demandado por concepto de daño material y daño moral asciende a \$893.089.083.-, más intereses y costas.

Por lo expuesto y previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra de Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, representado por don Luis Alberto Pizarra Saldía; y en contra de la Ilustre Municipalidad de la Cisterna, representada por su Alcalde don Santiago Rebolledo Pizarra, acogerla a tramitación y en definitiva declarar que los demandados, representados en la forma expuesta, sean condenados solidariamente, o simplemente conjunta, y a su costa al pago de una indemnización de perjuicios correspondiente a: 1) 20% del valor de adquisición de las viviendas para cada propietario, ascendente a la suma de 142 UF, que equivale a \$3.738.761.- a la fecha de presentación de la demanda, por concepto de daño material; 2) \$8.635.207.- por concepto de daño material a Condominio Vista Hermosa; y 3) 300 UF para cada uno de los propietarios por concepto de daño moral, ascendentes a la suma de \$7.898.790.- a la fecha de presentación de la demanda, o bien, lo que el tribunal estime pertinente otorgar, todo ello más intereses y costas.

**A fojas 113**, don Santiago Rebolledo Pizarro, alcalde, en representación de la Municipalidad de La Cisterna, contesta la demanda, solicitando su rechazo.

Indica que primeramente que opone la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria de perjuicios por responsabilidad extracontractual de acto de la corporación que representa.



Expresa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil: “Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.

Precisa que procede este plazo, en la especie, por dos razones: a) por principio de especialidad, ya que se refiere a la responsabilidad extracontractual civil, en general, y la responsabilidad civil del Estado es un tipo de responsabilidad extracontractual civil, y b) porque es admisible el dolo y culpa como componente de la responsabilidad de los órganos públicos.

Expresa que, si se analiza lo que expone la propia demanda, la Dirección de Obras de su representada, emitió el certificado de Recepción Definitiva, con fecha 3 de diciembre del año 2012, que es el último de los actos en que interviene respecto de la construcción defectuosa. Y si se cuentan cuatro años a partir de este plazo, sucede que el mismo prescribió el 3 de diciembre de 2016, denotando el timbre de la demanda de autos, fue distribuida al tribunal el mismo día que se interpuso, es decir, el 9 de diciembre de 2012, o sea, 6 días después de que la acción prescribió.

En subsidio, invoca la excepción de falta o ausencia de competencia, entendida como atribución administrativa, y, por tanto, del deber de fiscalizar las obras sobre las que se pronuncie, en un plano o rango que permita advertir defectos constructivos.

Arguye que su representada no debe responder por los daños experimentados por los actores, simplemente porque no es de su competencia la construcción ejecutada, y ni siquiera su supervisión técnica.

Manifiesta que el hecho de que las Direcciones de Obras de las distintas municipalidades, otorguen permisos de edificación y, posteriormente, recepción final de las obras, no significa que hayan ejecutado las obras ni que



las hayan visto directamente por sí. Y esto, por cuanto las Direcciones de Obras se fundan en los planos de las obras y en los certificados correspondientes a cada especialidad que deben adjuntar los constructores del edificio en cuestión. Primero se solicita permiso de edificación, la Dirección de Obras revisa que tal solicitud cumpla con los parámetros de la norma urbanística del Plan Regulador vigente y se otorga, así, el permiso de edificación. A continuación, se construye, de acuerdo al legajo aprobado para el permiso de edificación. Y ya finalizada la obra, se elabora el expediente de recepción final, que deben ejecutar los profesionales que patrocinan la construcción de la obra. Este expediente deberá contener todas las certificaciones, informes técnicos y libro de obras, todo lo cual da cuenta de la obra ejecutada, acompañándose de la solicitud de recepción definitiva. La Dirección revisa que la edificación u obra haya cumplido a lo aprobado en el permiso, es decir, es un análisis documentario, que se funda en los diseños adjuntadas en forma previa. Haciendo fe de los instrumentos acompañados, esto es, asumiéndose que lo expuesto corresponde a la realidad. En la recepción final se hace una visita de los profesionales de la Dirección de obras en terreno, pero lo que se puede verificar es que, en términos generales, lo construido coincida con lo planificado. Es decir, que si lo planificado es un edificio con treinta departamentos, existan tales departamentos, y seis habitaciones en cada uno incluyendo baño. Pero no existe tiempo ni modo de apreciar la calidad del estuco de la construcción, que es materia, del constructor y del Inspector Técnico de la Obra que, en la especie, fue el Serviú, y en ningún caso la Municipalidad.

Agrega que la Unidad Técnica de las obras en que intervenga el SERVIU, la responsabilidad técnica es de su resorte. En suma, es el SERVIU



el ITO de tales obras, aquellas llevadas a cabo bajo su fiscalización técnica y, en caso alguno, la Municipalidad, cuya función es la revisión, esencialmente instrumental y de los aspectos genéricos de la obra.

Precisa que sería tan absurdo sostener que toda responsabilidad es del Estado, lo que resulta objetivamente ilógico, puesto que la responsabilidad del Estado es residual de que exista otra, en la especie, del constructor o empresa constructora. Y curiosamente, los actores jamás demandan a la empresa constructora, que es el ente que ejecutó directamente la obra que se cuestiona y cuyos efectos son objeto de la demanda.

Por otra parte, afirma que los actores citan los preceptos de la ley 18.695 o Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero estos preceptos genéricos deben interpretarse conforme a las normas técnicas de la LGUC. Las normas de la Ley 18.695 son generales y las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción resultan más precisas en cuanto a las labores de la Dirección de Obras de una municipalidad, dejando en claro que las labores son de revisión y fiscalización de los instrumentos y de revisión de la obras, pero -esta última actividad- no en un plano profundo o de revisión de la ejecución de las obras mismas, no supervisando la calidad de los materiales, porque eso excede el trabajo o labor de la Dirección de Obras Municipales, sino efectuando una revisión visual gruesa del contenido de la obra en relación a la proyección de los planos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, invoca la excepción de imposibilidad material de cumplimiento de obligación legal, que puede configurarse como integrante del principio de realidad, pero que está configurado, en el ámbito civil, bajo la fórmula de que “a lo imposible no se está obligado”.



Indica que en la Municipalidad de La Cisterna, existen cuatro arquitectos, todos los cuales no dan abasto para la revisión de todas las peticiones que llegan diariamente a la Dirección. Asimismo, deben revisar todos los documentos relativos a las diversas obras que se ejecutan en la comuna, desde obras menores a mayores, por lo cual, tratándose de los aspectos técnicos de terreno para los fines de recepciones finales, es preciso que la revisión sea visual y de mecanicidad inmediata: que las puertas y las ventanas abran, que de las llaves salga agua, etc., pero no podrían hacer una revisión más profunda y detallada, porque esto no sería materialmente posible. Además, la municipalidad carece de los medios para revisar, por ejemplo, muestra de sellado o concreto y, aunque pudiera extraer tales muestras, carece de los medios para revisar la calidad de lo construido.

Sostiene que por lo anterior resulta materialmente imposible una fiscalización mayor que aquella que la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de La Cisterna realizó en la obra aludida, lo cual constituye una excepción de la responsabilidad que los actores pretenden invocar a su representada y que solicita acoger, rechazando la demanda de autos respecto de lo alegado y excepcionado.

En subsidio, invoca la falta de fundamento jurídico de la acción intentada.

Señala que se denota esta ausencia de fundamento, en primer lugar, en el hecho de que los actores enuncian que su representada ha cometido falta de servicio, pero no señalan cómo opera esta falta de servicio generando el daño que dice haber experimentado.

Explica que la falta de servicio, como institución de responsabilidad del Estado, no es una palabra genérica, debe operar de ciertas formas y debe





explicarse cómo estas formas han generado el daño, demostrando la relación entre tales formas y el daño o perjuicio. Pues bien, en la demanda de autos, no se explica de qué manera operaría la falta de servicio y, atendido que éste es el fundamento jurídico de la acción de autos, lo cual redundaría necesariamente en falencia de la fundamentación jurídica de la demanda.

Añade que falta fundamentación jurídica, en cuanto no se considera el elemento subjetivo de la responsabilidad extracontractual, tradicionalmente constituida por el daño, el dolo y la culpa, además de la causalidad que los conecta. Ya que la más reciente jurisprudencia de nuestros Tribunales de Alzada, ha indicado que es preciso que la falta de servicio concorra con el ámbito de la culpa o dolo del que ejecuta el hecho generador del daño, o, al menos, la culpa.

Afirma que esta fórmula (la subjetividad con que se ejecuta el daño) corresponde a la regla general, que debe verificarse, en toda responsabilidad extracontractual, se expuso que no era componente de la responsabilidad objetiva del Estado por falta de servicio, sin embargo, la jurisprudencia reciente ha señalado lo contrario. Por lo cual debe entenderse que en la demanda debió indicarse el dolo o culpa, lo cual no sucedió, constituyendo esta omisión una ausencia inexcusable de fundamento de la acción de autos. En la especie, los actores no mencionan el dolo o culpa, componente esencial de la acción indemnizatoria intentada, por lo que, entonces, no se ha indicado de qué forma los hechos perpetraron la falta de servicio y, por lo tanto, existe falencia del fundamento jurídico que debió tener la acción de autos.

Señala que a la culpa se la ha definido habitualmente como la falta de diligencia o cuidado en la ejecución de un hecho o en el cumplimiento de una obligación. En el primer caso, la culpa es extracontractual, delictual o



aquiliana, y en el segundo es contractual. Existen claras diferencias en nuestra legislación entre ambas clases de culpa. Manifiesta que, de este modo, los actores debieron consignar en su demanda el dolo o culpa, de la responsabilidad civil general, como componente de la falta de servicio, esto es, debe ejecutarse mediando dolo o culpa, lo cual, de no considerarse por los actores, no puede prosperar la acción, del mismo modo que debió indicarse de qué modo opera la falta de servicio como hecho generador del daño, razones por las cuales solicita rechazar la demanda de autos por falta de fundamento jurídico de la acción intentada.

En subsidio, solicita reducir el daño a indemnizar, en virtud de los siguientes argumentos:

1.- En primer lugar, decantar la responsabilidad de los entes públicos demandados, por cuanto la responsabilidad de los órganos del Estado no es solidaria sino conjunta, es decir, si se acciona en contra de órganos del Estado diversos, opera la regla general, que es la responsabilidad conjunta y, como en el caso no existe excepción legal, debe entenderse, justamente, que la procedente es la responsabilidad conjunta, no la solidaria, sin embargo, esto no ha sido señalado en la demanda de autos.

Afirma de que en el caso de que el tribunal estime condenar, considerando el carácter conjunto, como en derecho corresponde, es procedente, de conformidad con el principio de proporcionalidad, atribuir a los entes públicos demandados, responder en conformidad a su participación, por acción u omisión, en el daño o hecho generador del perjuicio.

Sostiene que su representada, salvo en la recepción final, no participó en la ejecución de las obras, como sí lo fue el SERVIU Metropolitano, que fue ITO o Inspector General de la Obra ejecutada, no revisó la forma en que las



obras se ejecutaban y no pudo constatar los materiales que se emplearon en la obra ni en la forma en que se emplearon.

Advierte que solamente, mediante algunos de sus arquitectos, hizo una inspección, para pronunciarse en la recepción final, y respecto a aspectos visuales o funcionales inmediatos de la obra. Su responsabilidad no puede ser igual que si hubiese actuado constatando la forma en que se ejecutó la obra o revisando los materiales que se emplearon en la obra cuestionada. Su concurrencia en la indemnización debe, por tanto, ser cuantitativamente menor.

2.- Reducir el monto a indemnizar en razón del daño efectivamente causado, muy lejos de las pretensiones excesivas e infundadas en este aspecto, que consignan la demanda.

Afirma que en primer lugar señala la demanda que debe indemnizarse por el valor de un 20% del valor de adquisición de cada propietario. Lo que ya es excesivo, especialmente porque no todos los departamentos experimentaron daño ni todos en la misma forma, por lo tanto, un valor genérico no se justifica, no resulta lógicamente admisible.

Agrega que, por otro lado, no explican por qué demandan un 20% del valor de cada departamento, como una cifra genérica.

Señala que se indica en la demanda que debe indemnizarse \$8.635.207 de daño material y esto da una idea de los montos que debe prosperar, sin perjuicio de que los actores no notan que en este monto debe estar el valor que demandan a continuación.

Añade que los actores demandan 300 unidades de fomento para cada uno de los propietarios por concepto de daño moral. Esta cifra es abultada, excesiva y aún abusiva, incluso superior a todo daño material o reparación



que se haya efectuado o se demande, y que, en todo caso debe ser reducida al daño moral efectivamente acreditado. Es evidente que el dolor o la aflicción no puede ser semejante en todos los actores porque los daños invocados no tienen la misma entidad en todos los casos y en algunos no se advirtieron daños, por lo tanto, el efecto en el ámbito moral no puede ser equivalente y, por lo tanto, tampoco la indemnización.

Indica que, en consecuencia, atendido lo expuesto con antelación, solicita reducir el monto a indemnizar de conformidad con los argumentos antes señalados y limitarlo, una vez considerado lo expuesto, a lo efectivamente acreditado por los actores.

**A fojas 143**, comparece doña Paz Ortuzar Fuenzalida, abogado, por la parte demandada Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, solicitando el rechazo de la demanda.

Afirma que la parte demandante solicita que se condene a los demandados “por falta de servicio”, generando con ello los perjuicios que se reclaman, y que su parte estima excesivos y que son producto de la mala calidad de la construcción.

Agrega que la contraria cita normas sobre la responsabilidad por falta de servicio, pero en ningún caso indica cuál sería la supuesta falta de servicio incurrida por Serviu.

Señala que la demandante indica que habría contratado para la construcción de proyecto de vivienda social, a través de subsidios solicitados a Serviu Metropolitano, realizado en virtud del Decreto Supremo 174 de Vivienda y Urbanismo del año 2005.



Refiere que la demandante alega que Serviu y la Municipalidad habrían incurrido en falta de servicio por el producto defectuoso del proyecto de viviendas sociales.

Indica que la relación causal entre las faltas de servicio imputadas no entendiendo si es por acción u omisión, toda vez que solo señala que hay mala calidad de la construcción y la mala calidad de la construcción fluiría solo por el hecho de ser Serviu el que interviene en el proyecto. No existiendo por ende relación de causalidad en este caso. Serviu ha actuado conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 174 otorgando los subsidios respectivos y velando que los recursos de estos sean utilizados en el proyecto ejecutado, con estricto apego a la Constitución, y a las normas dictadas conforme a ella.

Manifiesta que Serviu fiscaliza el proyecto solamente no teniendo injerencia sobre la creación del proyecto, simplemente velando por que se cumpla el proyecto para proceder a entregar los respectivos certificados de subsidios y su correspondiente pago.

Afirma que la contraparte establece que existiría solidaridad entre las demandadas, situación que su parte estima que no es aplicable, toda vez que no se ha pactado solidaridad entre las partes, naciendo dicha obligación por el estatuto de la responsabilidad extracontractual.

En cuanto al Derecho, señala que la responsabilidad de su parte se encontraría prescrita.

Sostiene que conforme a lo sustentado por la jurisprudencia, las acciones contra el Fisco y sus agentes, aunque no tengan un plazo de prescripción expreso, no pueden subsistir indefinidamente en el tiempo, por razones de necesaria seguridad y certeza jurídica, motivo por el cual en el caso de las acciones en que se persigue la reparación de daños causados por



un servicio público por una supuesta falta de servicio, prescriben del mismo modo que las acciones civiles que persiguen igual fin, en el plazo de 4 años, contado desde la perpetración del acto. Se aplica por analogía y por cuestión de equidad como fuente del derecho, la norma del artículo 2332 del Código Civil. Ello por cuanto del espíritu general de la legislación, tanto en el ámbito del Derecho Público como privado se desprende que las acciones son prescriptibles, constituyendo la imprescriptibilidad una situación de excepción, que se presenta sólo en aquellos casos en que la ley lo dispone expresamente.

Manifiesta que en el presente caso la demanda fue notificada a su representada cuando ya se encontraba prescrita la acción indemnizatoria. En efecto, la demanda en cuestión fue notificada el 2 marzo de 2017 e interpuesta el 9 de diciembre de 2016, encontrándose prescrita la acción. Asimismo, esta obra fue recepcionada con fecha 3 de diciembre de 2012, expirando el plazo de 4 años abiertamente

Arguye que la responsabilidad que se atribuye a su representada se radicaría en una supuesta falta de servicio por mala calidad de la construcción sin indicar a qué tipo de falta de servicio se refiere, siendo la obra entregada mediante certificado de recepción con fecha 3 de diciembre de 2012 y contratado el 25 octubre de 2010.

Manifiesta que el actor ha deducido acción ordinaria de indemnización de perjuicios por falta de servicio, fundado en el hecho de que Serviú Metropolitano habría entregado una obra con mala calidad de la construcción, no cumpliendo estándares mínimos de construcción y que como consecuencia de ello se han ocasionado daños, por la actividad o inactividad deficiente del estado.



Añade que con fecha 25 de octubre de 2010 la contraria celebró contrato de construcción y mandato para el Programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, conforme al Decreto Supremo 174 del año 2005 de Vivienda y Urbanismo con la Egis Creativa y la Constructora Civil Works Ltda. mediante el Comité para la Vivienda Vista Hermosa, en el cual Serviu participa otorgando subsidios.

Indica que con fecha 3 de diciembre de 2012 la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de la Cisterna emitió el certificado de recepción definitiva de obras de edificación del inmueble ubicado en Av. Goycolea N° 467 - A y 467-B, de la comuna de la Cisterna.

En cuanto a la solidaridad, expresa que los actores señalan que Serviu sería responsable solidariamente junto a la municipalidad, de los perjuicios sufridos, tratándose de la responsabilidad por falta de servicio no existe norma legal alguna que la establezca.

Arguye que conforme a lo previsto en el artículo 1511 inciso 2 y 3 del Código Civil, la solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no lo establece la ley, caso que no ha sido acordado por las partes, siendo una institución de derecho y de interpretación restrictiva.

Añade que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil exige que la demanda debe contener una exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apoya ello no ocurre en relación a la responsabilidad pretendida, sin señalar cual es el incumplimiento, cual es la acción u omisión incurrida por el Serviu, limitándose solo a indicar normativa.

Sostiene que en la demanda se incurre en el error de no señalar cuál es la falta de servicio incoada a su parte, cuestión que constituye un presupuesto



fundamental de la responsabilidad que se pretende atribuir a Serviu Metropolitano, entidad que solo cumple el rol de fiscalizar de acuerdo a lo establecido en el respectivo decreto supremo 174 del año 2005 de Vivienda y Urbanismo.

Agrega que no se ha cumplido con lo dispuesto en el N°4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto exige “La enunciación precisa y clara, consagrada en la conclusión, de las peticiones que se sometan a la decisión del tribunal”.

Afirma que las viviendas se consideran en el proyecto de construcción respectivo, muros sin revestimiento, pasillos sin baldosas, entre otras circunstancias, en que Serviu no tiene participaciones.

Arguye que, atendido al insuficiente e indeterminado petitorio de la demanda, toda vez que no indica cual es la supuesta falta de Servicio incurrida por Serviu, solo se referirá en forma somera a ello, pudiendo llegar a incurrirse en ultrapetita en caso de ser acogida.

Manifiesta que respecto a la falta de servicio incoada, los artículos 38 de la Constitución y 4 de la Ley de Bases establecen que para que nazca la obligación de indemnizar se requiere daño producido por la Administración y que los órganos hayan actuado en el ejercicio de sus funciones (considerando 71), enfatizando en los considerandos siguientes que existe un mandato objetivo que grava al Estado por la sola circunstancia que el daño haya sido producido con motivo de la actuación de un órgano; que la única condicionante legal es que el daño se haya producido en el ejercicio de las funciones; que se trata de una responsabilidad legal y, por último, que se trata de una responsabilidad objetiva “consagrada por razones de equidad” cuando concurren los presupuestos del artículo 4 de la Ley de Bases. El fallo de





segunda instancia agrega como fundamentos los artículos 4, 5 y 6 de la Constitución, citando profusamente al profesor Hugo Caldera en su obra del año 1982, incorporando a los argumentos allí señalados el artículo 4 de la Ley de Bases y concluyendo con la cita de H. Caldera que “para que la responsabilidad tenga lugar y para que nazca el derecho de la víctima a ser indemnizada es suficiente que la actuación del agente público esté relacionada con el servicio u órgano público y que haya un vínculo directo de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido” (Considerando 37). La posición de Hugo Caldera, en su obra, editada con anterioridad a la Ley de Bases, sirvió también de fundamento al fallo de 23 de diciembre de 1993 de la Corte de Apelaciones de Santiago, publicado en Gaceta Jurídica de diciembre de 1993, N° 162, para condenar al S.A.G. por daños causados en su actividad legítima al prohibir el uso de un predio para evitar la propagación de fiebre aftosa. El fallo, citando a H. Caldera en relación con el artículo 38 de la Constitución Política, señala: “En presencia del perjuicio y constatada su relación directa de causalidad con aquel, para los efectos de la obligación de indemnizar el perjuicio, tampoco se atiende a si el daño es producto de una actuación u omisión irregular, esto es, constitutiva de falta de servicio o por una actuación lícita que provoque daños a los particulares”.

En cuanto a los perjuicios demandados, sostiene que su parte no reconoce la naturaleza ni menos los montos de los perjuicios reclamados, por lo que necesariamente ellos deben ser materia de prueba, así como los que provengan de la falta de servicio de su representada, cuestionando y contravirtiendo la cuantía y naturaleza de los daños demandados, tanto como daño emergente y lucro cesante, ello en virtud de que Serviu no es parte en los



contratos de construcción y ha cumplido con el rol consagrado en el respectivo decreto supremo.

En relación a las indemnizaciones de perjuicios solicitadas, especialmente en cuanto al daño moral, afirma que los actores no dejan claro en su demanda cuál sería la afectación particular de cada uno de los demandantes, no los detalla, toda vez que los supuestos que cubre el daño moral, van desde el daño a la integridad física, al perjuicio psíquico, la aflicción, la ansiedad, el temor, la angustia, la pérdida de agrado, etc., no siendo sufridos de la misma manera por las personas, afectándoles por ende a cada uno de los actores de distinta manera, en circunstancias que la demanda solicita una cantidad específica equivalente a \$7.898.790.- pesos para cada demandante.

Indica que los daños materiales demandados consistentes en inundaciones, filtraciones, mal estado de techos, no resultan coincidentes con la descripción que se hace de cada uno de ellos en la descripción de los mismos demandando igualmente el mismo daño para cada uno.

Expresa que la demanda atribuye que habría existido una actitud descuidada, no se entiende qué responsabilidad es la atribuida, sin perjuicio de ello establecería que no se cumplen estándares de construcción mínimos. La inspección técnica de la obra que realiza Serviu se encuentra establecida en la Resolución N° 533 de Vivienda y Urbanismo del año 1997, el Serviu inspecciona y recibe obras junto a las Egis, que raramente no han sido demandadas con la Constructora, inspecciones que Serviu realizó de acuerdo a la ley y al proyecto respectivo.

Señala que los daños morales son absolutamente desproporcionados en relación al ínfimo costo de reparación de las viviendas que debieron efectuar,



para solucionar problemas, que fueron ocasionados por un acto imputable a la Comunidad de Vista Hermosa, toda vez que las viviendas sociales se entregan sin baldosas y con un fin estético, realizaron la instalación de baldosas en zonas comunes y lo hicieron en desnivel adecuado provocando dicho acto inundaciones. La misma situación ocurre con copa de agua que fue afectada por los vecinos toda vez que la dañaron con los vehículos al ocupar esa zona como estacionamiento. De haber sufrido los actores daños morales, ellos distan mucho de lo que razonablemente se podría suponer atendido el relato que se hace en la demanda en lo tocando a dichos perjuicios. Más aún si se analiza el libelo, no se señala ni se individualizan los padecimientos de cada uno, limitándose a presumir que todos lo sufren de la misma manera, por las supuestas faltas constructivas de las viviendas entregadas, y que Serviú habría incurrido por ello en falta de Servicio.

Agrega que el daño moral entendido como el dolor o aflicción sufrida a causa del hecho que se imputa al demandado en un juicio, no solo debe ser explicado circunstancialmente, sino que además debe ser atribuido en forma clara y directa al sujeto activo de la acción no indicando someramente que el monto de indemnización es igual para todos, toda vez que todos sufren de manera distinta el daño moral, cuestión que no ocurre en la demanda.

Precisa que el daño moral debe ser atribuido también en forma directa a la supuesta falta de servicio que se imputa a los demandados, y ella tampoco se hizo en el libelo. Así al menos respecto de su representada no se señala que los daños morales reclamados tengan su causa o provengan de la circunstancia atribuida a falta de servicio, situación que no queda clara en la demanda razón por la cual se interpuso excepción dilatoria, sin perjuicio de ello Serviú Metropolitano, conforme al Decreto Supremo 174 del año 2005 tiene la



función de fiscalizar que los fondos provenientes de los subsidios sean efectivamente utilizados para ello, no teniendo injerencia en el contrato que celebran las partes, en este caso entre la Egis, la Constructora y el Comité Vista Hermosa, la cláusula primera del contrato de construcción establece que la Egis postula al proyecto Vista Hermosa con el fin de que el Comité obtenga del Serviú los beneficios que el Decreto Supremo establece y les otorgue el respectivo certificado de subsidio habitacional al programa de fondo concursable de acuerdo nómina de beneficiarios.

Sostiene que ni existiendo una clara explicación de la naturaleza de los daños morales supuestamente sufridos por los actores, ni una relación precisa y nítida con la falta de servicio que se imputa a s representado, la demanda en este aspecto no puede ser acogida. Además, para que el daño moral, como cualquier daño, pueda ser indemnizado se requiere que sea legal y debidamente acreditado en el proceso.

Añade que en el caso que el tribunal estime acreditado y procedente el daño material y moral alegado, su monto debe ser regulado en una suma muy inferior a la pretendida, tomando en consideración aspectos como su intensidad, duración, sufrimiento, proporcionalidad.

**A fojas 152**, la parte demandante evacuó el trámite de réplica.

Se refiere primeramente a las excepciones y defensas opuestas por la Municipalidad de La Cisterna

En cuanto a la excepción de prescripción, afirma que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma expresa en materia de plazo de prescripción de la acción indemnizatoria por falta de servicio. En consecuencia, ha de aplicarse supletoriamente la regla general de prescripción contenida en el artículo 2332 del Código Civil.



Manifiesta que su parte señaló expresamente en su libelo pretensor que los hechos objeto del presente litigio y que ocasionaron perjuicios a sus representados se produjeron durante el temporal de junio de 2013, (sin perjuicio que, a la fecha, en cada temporal siguen aumentando los daños a sus representados). Por lo tanto, desde esa época debe contabilizarse el plazo para alegar la prescripción extintiva, y no desde el certificado de recepción definitiva de obras -otorgado con fecha 3 de diciembre de 2012-, que según la demandada sería la fecha en que realizó el último de los actos en que interviene respecto de la construcción defectuosa.

Sostiene que, decretando la prescripción de una acción indemnizatoria por falta de servicio, la Excelentísima Corte Suprema ratifica lo expuesto por su parte, citando sentencia de reemplazo dictada con fecha 23 de octubre de 2012 en autos Rol Ingreso N° 8.845-2009.

Arguye que mal podría considerarse la fecha de recepción definitiva de obras como inicio del cómputo del plazo de los 4 años que establece la ley por una simple razón: los daños sufridos por sus defendidos acaecieron en el mes de junio de 2013. La insólita tesis de la demandada supondría arribar a la absurda conclusión de que habría transcurrido una parte del plazo de prescripción de la acción indemnizatoria antes de producirse los perjuicios demandados –período comprendido entre los meses de diciembre de 2012 y junio de 2013–. Como consecuencia lógica de lo señalado, antes de producirse los perjuicios sus representados estaban impedidos de ejercer la acción, precisamente por no haberse verificado el elemento esencial en que ella se funda: el daño.

Añade que por un hecho totalmente ajeno a su voluntad, sus representados ostentan el título de propietarios de sus respectivos



departamentos sólo desde el segundo semestre de año 2015, circunstancia que su parte acreditará en la oportunidad pertinente. Esto, debido exclusivamente al retardo en la tramitación legal de los títulos por parte del SERVIU Metropolitano, como consecuencia de una insistente presión ejercida por los propios beneficiarios del subsidio. Obviamente antes de dicha fecha sus representados estaban impedidos de ejercer acciones que le competen en forma exclusiva a quien ostenta la calidad de propietario.

En cuanto a la excepción de falta o ausencia de competencia, entendida como atribución administrativa, y por tanto, del deber de fiscalizar las obras sobre las que se pronuncie, en un plano o rango que permita advertir defectos constructivos, señala que ninguna duda puede caber que la demandada Municipalidad de La Cisterna tuvo a su cargo la recepción definitiva del inmueble, y que es su Director de Obras quien tiene la obligación legal de fiscalizar las construcciones que se ejecuten en su comuna, contando para ello con todas las herramientas que el ordenamiento jurídico le confiere para tal efecto –entre otras, el libre acceso a ellas- debiendo en consecuencia advertir los errores y defectos en que incurrió la empresa constructora en materia de calidad de materiales y construcción.

Agrega que resulta a lo menos preocupante lo señalado por la contraria quedando de manifiesto el pobre concepto que tiene la demandada acerca de la responsabilidad que le cabe en lo relativo a la forma en que debe cumplir sus obligaciones legales, en particular respecto de las inspecciones municipales de las construcciones de las viviendas en su comuna. Al parecer estamos hablando de un simple trabajo de oficina, consistente en un mero papeleo, en el que escasamente le asiste la obligación de ir al lugar en que se ejecutan las obras. Resulta preocupante y hasta peligroso constatar que, en



opinión de la demandada, su obligación se limita a hacer fe y asumir que lo expuesto en la documentación que reciben con ocasión de un proyecto de construcción corresponde a la realidad, lo que resultaría suficiente para proceder a dar la respectiva aprobación.

Sostiene que la demandada hace mención a que no habría tenido el tiempo suficiente ni el modo de apreciar la calidad del estuco de la construcción, sin embargo, el edificio en que viven sus representados presenta múltiples defectos estructurales: grietas en juntas de dilatación, mala instalación de las ventanas sin corta goteras, mala calidad de las puertas, tableros de luz sin protección –lo que ocasiona un evidente riesgo de accidentes por las lluvias-, patio del edificio en desnivel y sin drenaje –lo que ocasiona verdaderas piscinas-, revestimiento exterior construido con hormigón celular que provoca graves filtraciones al interior de las viviendas, aleros del techo que se vuelan como consecuencia del viento, etc.

Refiere que la demandada argumenta que las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción establecen que las labores de la Dirección de Obras Municipales consisten en la revisión y fiscalización de los instrumentos, pero que esta última actividad comprende una revisión de la ejecución de las obras, que no le correspondería supervisar la calidad de los materiales, sino sólo efectuar una revisión visual gruesa del contenido de la obra en relación a la proyección de los planos. Considerando por un momento como certera esta insólita interpretación acerca de su labor, igualmente es dable concluir que la Municipalidad de La Cisterna incurrió en falta de servicio. En efecto, si la Dirección de Obras hubiera tenido un desempeño medianamente acucioso, habría podido detectar las múltiples y evidentes falencias que presenta la construcción revisada por ella, principalmente en lo



relativo a sus condiciones de impermeabilización, aislamiento térmico, existencia de canaletas, techos, todos elementos indispensables para la ejecución de una construcción aún a los ojos de un lego en la materia.

En cuanto a la alegación de imposibilidad material de cumplimiento de una obligación legal, indica que el hecho de que la demandada señale como medio de defensa que los cuatro arquitectos con los que cuenta no dan abasto para la revisión de todas las peticiones que llegan diariamente a la dirección, de manera alguna constituye una justificación que amerite eximirla de responsabilidad en los hechos materia de esta demanda. Muy por el contrario, dicha afirmación permite reforzar los fundamentos en que se funda la demanda de autos, y constituye un reconocimiento tácito de responsabilidad en los hechos que le sirven de sustento. Dicho en otros términos, la municipalidad demandada está reconociendo el incumplimiento de una obligación legal. Desde un punto de vista jurídico resulta inaceptable que la demandada invoque el aforismo “a lo imposible nadie está obligado”, fundada en la supuesta falta de personal para dar cumplimiento a sus obligaciones; nuevamente lo que hace es confirmar que incurrió en una evidente falta de servicio. En verdad, más que una justificación legal parece una burla: el hecho que se trate de una construcción de viviendas sociales, realizada con fondos solidarios y para gente que carece de los medios económicos para obtener otro tipo de vivienda de mejor calidad, en caso alguno puede considerarse como una circunstancia que exima a la municipalidad de su obligación de ejercer de manera adecuada sus obligaciones legales.

Reitera los fundamentos expuestos en relación a la excepción anterior, en cuanto la obligación que le asiste a la Dirección de Obras de la





Municipalidad de La Cisterna de llevar a cabo una correcta fiscalización en la actividad de la construcción que se lleve a cabo en el territorio de su comuna.

En cuanto a la alegación de falta de fundamento jurídico de la acción intentada, sostiene que, considerando la relación de los hechos y fundamentos de derecho de la acción intentada, su parte es clara en su escrito de demanda al exponer la falta de servicio en que ha incurrido la demandada de autos.

Precisa que, sin perjuicio de lo señalado, y complementando lo expuesto en el escrito de demanda en los términos que lo establece el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, expone que en la especie es claro que la responsabilidad de la municipalidad demandada emana ya sea del acto ilegal cometido –infringir la Ley Orgánica de Municipalidades–, como de la deficiente actuación realizada, en cuanto a la fiscalización de las obras, como ella misma lo reconoce en su escrito de contestación de la demanda. Por lo tanto, el sustrato jurídico que configura su responsabilidad se encuentra claramente establecido en el libelo de la demanda, y complementado en su presentación.

En cuanto al dolo o culpa de las demandadas, reitera lo expuesto en el libelo pretensor, señalando a su vez que diversos fallos emanados de la Excma. Corte Suprema califican de objetiva la responsabilidad consagrada en el artículo 152 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en cuanto se prescinde en su configuración de la prueba del dolo o culpa del autor, imponiendo a la víctima solo la prueba del daño causado. Es más, en materia municipal nos encontramos con una especial forma de responsabilidad pública objetiva, que refleja el claro propósito del legislador de librar a la víctima del peso de la prueba del dolo o culpa en la responsabilidad por daños.



Sostiene que, sin perjuicio de lo señalado, en la parte expositiva de la demanda y en sus fundamentos de derecho, su parte expone y explica en forma pormenorizada las infracciones en que incurrió la municipalidad demandada y la forma en que su actuar ocasionó los daños que se demandan en esta causa.

En cuanto a la solicitud de reducción de los montos del daño a indemnizar, expresa que tales montos fueron cuantificados en relación a los daños efectivamente sufridos por los propietarios del inmueble que accionan en la presente causa, considerando el tiempo transcurrido, el daño material y el daño moral, sin perjuicio, de lo que el tribunal determine en definitiva de acuerdo a la prueba que se rinda en autos, materia que -conforme a derechos de su exclusiva ponderación.

Luego, se refiere a las excepciones opuestas por el Serviu.

En cuanto a la excepción de prescripción, reitera los argumentos expuestos precedentemente a propósito de idéntica excepción opuesta por la Municipalidad de la Cisterna.

Señala que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma expresa en materia de plazo de prescripción de la acción indemnizatoria por falta de servicio. En consecuencia, ha de aplicarse supletoriamente la regla general de prescripción contenida en el artículo 2332 del Código Civil.

Indica que en el libelo pretensor su parte señala en forma expresa que la ocurrencia de los hechos objeto del presente litigio y que ocasionaron los perjuicios demandados por mis representados se produjeron durante el temporal de junio de 2013. Por lo tanto, es desde esa época desde donde se debe contar el plazo para alegar la prescripción extintiva, y no desde la fecha de recepción de la obra. Destaca que la demandada Serviu Metropolitano fue



notificada con fecha 2 de marzo de 2017, esto es, antes de vencer el plazo de prescripción de cuatro años que establece la ley.

Sostiene que, decretando la prescripción de una acción indemnizatoria por falta de servicio, la Excelentísima Corte Suprema ratifica lo expuesto por su parte.

Afirma que mal podría considerarse la fecha de recepción definitiva de obras como inicio del cómputo del plazo de los 4 años que establece la ley por una simple razón: los daños sufridos por sus defendidos acaecieron en el mes de junio de 2013. La insólita tesis de la demandada supondría arribar a la absurda conclusión que habría transcurrido una parte del plazo de prescripción de la acción indemnizatoria antes de producirse los perjuicios demandados –período comprendido entre los meses de diciembre de 2012 y junio de 2013-. Como consecuencia lógica de lo señalado, antes de producirse los perjuicios sus representados estaban impedidos de ejercer la acción precisamente por no haberse verificado el elemento esencial en que ella se funda: el daño.

Añade que, por un hecho totalmente ajeno a su voluntad, sus representados ostentan el título de propietarios de sus respectivos departamentos sólo desde el segundo semestre de año 2015, circunstancia que su parte acreditará en la oportunidad pertinente. Esto, debido exclusivamente al retardo en la tramitación legal de los títulos por parte del Serviu Metropolitano, y como consecuencia de una insistente presión ejercida por los propios beneficiarios del subsidio. Obviamente, antes de dicha fecha sus representados estaban impedidos de ejercer acciones que le competen en forma exclusiva a quien ostenta la calidad de propietario.



En cuanto a que la demanda no señalaría el tipo de falta de servicio en que se funda, expresa que la demanda es clara en describir la falta de servicio en que incurrió la demandada: actitud descuidada, negligente y omisiva en relación a las obligaciones que le impone la normativa legal y técnica, que establece estándares mínimos en materia de calidad de la construcción.

Arguye que dicha circunstancia constituye la falta de servicio que ha ocasionado un grave perjuicio a los propietarios y residentes de los departamentos del Edificio Vista Hermosa, y que deriva de la ausencia o deficiente supervigilancia en que incurrió la demandada respecto de las obras, de la inversión efectuada, de la inadecuada y deficiente calidad de los materiales utilizados. En resumen, una sumatoria de circunstancias que derivaron inevitablemente en un detrimento en el patrimonio de los demandantes, tanto por las reparaciones que han tenido que efectuar para mejorar -en parte- su calidad de vida, tanto por los daños producidos a la salud física y psíquica de ellos y demás miembros de sus familias.

Reitera que en la especie es claro que la responsabilidad de Servicio de Vivienda y Urbanización emana ya sea del acto ilegal cometido – infringir normas Constitucionales, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, las contenidas en DL N° 1.305 que impone diversas obligaciones a Serviu Metropolitano- como de la deficiente actuación realizada respecto de sus obligaciones consistentes en la fiscalización y supervigilancia de las obras. Por lo tanto, el sustrato jurídico que configura su responsabilidad se encuentra claramente establecido en el escrito de demanda, y complementado en el escrito de réplica.

En cuanto a la improcedencia de la solidaridad en responsabilidad por falta de servicio, expresa que resulta curioso que la contraria haga referencia a



normas que regulan la responsabilidad contractual, en circunstancias que nos encontramos frente a un caso de responsabilidad por falta de servicio, que se rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual, en su artículo 2317 del Código Civil.

En cuanto a las omisiones de que adolecería la demanda, indica que en resolución de fecha 21 de agosto de 2017, el tribunal resolvió: “QUINTO: Que, en definitiva, de la atenta lectura del libelo cuestionado se puede colegir que aquel cumple suficientemente los requisitos establecidos en artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, resultando totalmente comprensible tanto los elementos facticos en que se cimenta la acción invocada, como en las peticiones concretas , motivo por el cual será desestimada la excepción del ineptitud del libelo por falta de algún requisito en el modo de proponer la demanda.”, de manera que la demandada Serviu Metropolitano está reiterando el mismo argumento invocado para oponer la excepción dilatoria antes señalada.

En cuanto a los perjuicios demandados y su monto, señala que la demandada hace mención a puntos que alegó como excepción dilatoria y que el tribunal rechazó. No obstante ello, su parte reitera que los montos demandados por concepto de daño moral se determinaron considerando que el malestar y aflicción padecidos por sus representados ha sido generalizado, y de una intensidad similar respecto de todos los habitantes del edificio.

Manifiesta que lo expuesto debe ser ponderado por el tribunal, sin perjuicio de la prueba que al respecto se rinda durante el término probatorio. Pretender una determinación más específica en esta instancia constituye una pretensión desmesurada y carente de toda lógica, atendidos los hechos en que se funda la demanda y la naturaleza propia del daño moral. En relación al



daño emergente (daños materiales), estos se acreditarán durante la secuela del juicio.

Por último, en cuanto al hecho de no haber accionado en contra de la Constructora Civil Works, señala que la empresa a cargo del proyecto -Civil Works- incumplió sus obligaciones, y que como consecuencia de ello sus representados han padecido los perjuicios demandados. Pero la circunstancia de haber omitido la acción indemnizatoria en su contra en caso alguno constituye una *conditio sine qua non* para hacer efectiva la responsabilidad de los demandados en esta litis. Se trata de una decisión adoptada por los actores que en caso alguno relevan de la obligación que tienen el Serviu Metropolitano y la Ilustre Municipalidad de La Cisterna de reparar los perjuicios ocasionados a sus representados como consecuencia de la falta de servicio en que ambos incurrieron, todo al tenor de lo expuesto tanto en el escrito de demanda como en esta presentación.

**A fojas 163**, la demandada Serviu Metropolitano evacuó el trámite de dúplica.

Expresa que insiste en que la contraria no ha subsanado el vicio de su demanda toda vez que indica que se demanda indemnización de perjuicios por falta de servicio en su petitorio, pero debió indicarse conforme a lo establecido en el artículo 254 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, debiendo indicarse la responsabilidad reclamada, el origen y el monto de las obligaciones demandadas, antecedentes que dan cuenta claramente que la demanda debería ser rechazada por falta de peticiones concretas, encontrándose por ende incorrectamente deducida, pudiendo incurrirse en ultrapetita para el caso de ser acogida.



Insiste a su vez en que la parte demanda (sic) ha actuado negligentemente toda vez que imputa daños que son consecuencia de su actuar inicial, toda vez que generó los presuntos daños incoados, como se acreditará en su oportunidad.

Afirma que la contraria establece que la solidaridad sería procedente, sin embargo, no se verifica la existencia de una obligación solidaria pues el fundamento normativo de la demanda se basó en el estatuto propio de la falta de servicio del artículo 44 de la Ley N° 18.575 que no contempla la solidaridad.

En cuanto a la prescripción, reitera las argumentaciones del escrito de contestación dándolas por reproducidas, indicando que su parte ha realizado las fiscalizaciones correspondientes hasta el pago de los respectivos subsidios con el fin de asegurar el adecuado destino de dichos fondos.

Reitera igualmente las argumentaciones sobre la controversia de las cuantías demandadas, cuestión que deberá ser probada por la contraria y se deben a su actuar culpable y negligente.

**A fojas 165, complementado folio 129**, se tuvo por evacuado el trámite de dúplica en rebeldía de la demandada Municipalidad de La Cisterna.

**A fojas 177 (folio 48)**, consta acta de audiencia de conciliación, celebrada con la asistencia de la apoderada de la parte demandante, la apoderada de la demandada Serviu Metropolitano y en rebeldía de la demandada Municipalidad de La Cisterna.

Llamadas a las partes a conciliación, ésta no se produce.

**A fojas 182 (folio 48)**, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

**A fojas 1560 (folio 132)**, se citó a las partes a oír sentencia.



**□ CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, a fojas 1, comparece doña Mónica Duarte Valenzuela, abogado, en representación de los demandantes individualizados previamente, interponiendo demanda de indemnización de daños y perjuicios por falta de servicio en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano y en contra de la Municipalidad de La Cisterna, en razón de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho previamente reseñados en lo expositivo de este fallo.

**SEGUNDO:** Que, a fojas 113, la demandada Municipalidad de La Cisterna contestó la demanda, solicitando su rechazo.

Por su lado, a fojas 143, la demandada Serviu Metropolitano contestó la demanda, solicitando su rechazo.

**□ TERCERO:** Que, con el objeto de acreditar sus dichos, la parte demandante acompañó los siguientes documentos:

**□ En custodia N° 7866-2016:**

**□ 1.-** Comprobante de egreso de fecha 31 de marzo de 2015, por la suma de \$560.000.-

**2.-** Boleta de ventas y servicios N° 192283 de Cerámicas Alvarado Ltda. de fecha 04 de junio de 2014, por la suma de \$255.440.-

**3.-** Boleta electrónica N°0011100549, de Construmart de fecha 14 de febrero de 2015, por la suma de \$973.531.-

**4.-** Copia de depósito Banco de Chile a Melón Áridos Ltda., de fecha 20 de junio de 2014, por la suma de \$247.520.-

**5.-** Comprobante de egreso de fecha 10 de octubre de 2015 y presupuesto, por la suma de \$290.000.-





6.- Boleta de ventas y servicios N° 0157951 de Cerámicas Alvarado Ltda., de fecha 08 de noviembre de 2012, por la suma de \$2.200.000.-

7.- Guía de despacho electrónica N° 031752212 de Sodimac S.A de fecha 20 de noviembre de 2012, por la suma de \$494.390.-

8.- Contrato de prestación de servicios de fecha 14 de noviembre de 2012.

9.- Contrato de prestación de servicios profesionales, de fecha 23 de octubre de 2012.

☐ En el expediente:

☐ 10.- A fojas 27, documento denominado “Informe Preliminar”, elaborado por la arquitecta Lucía Ríos O’Ryan.

☐ 11.- A fojas 189, copia de la inscripción de fojas 10639 número 9112, del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, con vigencia al día 23 de marzo de 2018.

☐ 12.- A fojas 203, copia de la inscripción de fojas 10298 número 8981, del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, con vigencia al día 27 de marzo de 2018.

☐ 13.- A fojas 219, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10718 número 9125, año 2015, de fecha 01 de marzo de 2018, de doña Alicia Julia Lizama Fuentes y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

14.- A fojas 231, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10712 número 9124, año 2015, de fecha 21 de marzo de 2018, de doña Amanda Teresa Navarro Vergara y su certificado de residencia de fecha 26 de marzo 2018.



15.- A fojas 245, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10906 número 9256, año 2015, de fecha 28 de febrero de 2018, de doña Andrea Paulina Gatica Díaz y su certificado de residencia de fecha 07 de marzo 2018.

16.- A fojas 257, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10561 número 9099, año 2015, de fecha 06 de marzo de 2018, de doña Carmen Gloria Gutiérrez Castro y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

17.- A fojas 271, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10754 número 9131, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña Carol Gloria Cáceres Padilla y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

18.- A fojas 289, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10408 número 8999, año 2015, de fecha 26 de febrero de 2018, de doña Carolina del Carmen Clavel Azar y su certificado de residencia de fecha 06 de marzo 2018.

19.- A fojas 297, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10342 número 8988, año 2015, de fecha 26 de febrero de 2018, de doña Claudia Catherine Chavarría Saavedra y su certificado de residencia de fecha 19 de marzo 2018.

20.- A fojas 311, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10627 número 9110, año 2015, de fecha 22 de febrero de 2018, de doña Constanza Carolina Yáñez Muñoz y su certificado de residencia de fecha 16 de marzo 2018.

21.- A fojas 325, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10772 número 9134, año



2015, de fecha 2 de marzo de 2018, de doña Elena del Pilar Meliñan Ponce y su certificado de residencia de fecha 7 de marzo 2018.

□22.- A fojas 522, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10445 número 9005, año 2015, de fecha 01 de marzo de 2018, de doña Elizabeth Andrea Avendaño Salazar y su certificado de residencia de fecha 09 de marzo 2018.

23.- A fojas 536, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10900 número 9255, año 2015, de fecha 28 de febrero de 2018, de doña Evelyn Andrea Matus Jiménez y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

24.- A fojas 549, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10311 número 8983, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de don Fernando Andrés Contreras Miranda y su certificado de residencia de fecha 02 de marzo 2018.

25.- A fojas 563, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10669 número 9117, año 2015, de fecha 13 de febrero de 2018, de doña Gladys del Carmen Valverde Aroca y su certificado de residencia de fecha 12 de marzo 2018.

26.- A fojas 577, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10912 número 9257, año 2015, de fecha 02 de febrero de 2018, de doña Gloria Adela Betzabé Aguilar Olivares y su certificado de residencia de fecha 09 de marzo 2018.

27.- A fojas 591, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10228 número 8969, año 2015, de fecha 09 de marzo de 2018, de doña Iris del Carmen Rojas Reyes y su certificado de residencia de fecha 14 de marzo 2018.



28.- A fojas 603, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10250 número 8973, año 2015, de fecha 20 de marzo de 2018, de doña Jessica Karin Dupre González y su certificado de residencia de fecha 26 de marzo 2018.

29.- A fojas 616, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10663 número 9116, año 2015, de fecha 28 de febrero de 2018, de doña Jessica Ivonne Vargas Vargas y su certificado de residencia de fecha 09 de marzo 2018.

30.- A fojas 629, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10748 número 9130, año 2015, de fecha 08 de marzo de 2018, de don Jorge Alonso Villalobos Cornejo y su certificado de residencia de fecha 12 de marzo 2018.

31.- A fojas 642, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10433 número 9003, año 2015, de fecha 21 de febrero de 2018, de doña Jocelyn Vanessa Catriñanco Martínez y su certificado de residencia de fecha 7 de marzo 2018.

32.- A fojas 658, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10246 número 8972, año 2015, de fecha 26 de enero de 2018, de doña Kattia Daniela Contreras Ramos y su certificado de residencia de fecha 30 de enero 2018.

33.- A fojas 671, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10894 número 9254, año 2015, de fecha 06 de marzo de 2018, de doña Lorena Aurora Riqueros Palma y su certificado de residencia de fecha 17 de marzo 2018.

34.- A fojas 684, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10615 número 9108, año



2015, de fecha 22 de febrero de 2018, de doña Lucila del Carmen Campos de la Fuente y su certificado de residencia de fecha 01 de enero 2018.

35.- A fojas 697, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10317 número 8984, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña Luz Eliana Contreras Valdivia y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

36.- A fojas 710, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10286 número 8979, año 2015, de fecha 21 de febrero de 2018, de doña Marcela Andrea Morales Aguirre y su certificado de residencia de fecha 27 de febrero 2018.

37.- A fojas 723, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10555 número 9098, año 2015, de fecha 21 de marzo de 2018, de doña Marcia Andrea Pino Rivera y su certificado de residencia de fecha 25 de marzo 2018.

38.- A fojas 736, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10390 número 8996, año 2015, de fecha 8 de febrero de 2018, de doña María José Cardoza Cardoza y su certificado de residencia de fecha 26 de enero 2018.

39.- A fojas 749, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10414 número 9000, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña María Antonieta Huircal Trangolaf y su certificado de residencia de fecha 12 de marzo 2018.

40.- A fojas 782, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10384 número 8995, año 2015, de fecha 01 de marzo de 2018, de doña María Elizabeth Núñez Martínez y su certificado de residencia de fecha 05 de marzo 2018.



41.- A fojas 795, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10682 número 9119, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña María Inés de las Mercedes Sandoval Otárola y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

42.- A fojas 342, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10603 número 9106, año 2015, de fecha 19 de febrero de 2018, de doña María Marcela Vives Valdés y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

43.- A fojas 396, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10262 número 8975, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña Marizzella Luisa Galleguillos Martínez y su certificado de residencia de fecha 05 de marzo 2018.

44.- A fojas 370, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10585 número 9103, año 2015, de fecha 28 de febrero de 2018, de doña Marjorie Vania Arenas Fredes y su certificado de residencia de fecha 07 de marzo 2018.

45.- A fojas 386, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10790 número 9137, año 2015, de fecha 08 de marzo de 2018, de doña Marjorie Jochabet Inostroza Martínez y su certificado de residencia de fecha 13 de marzo 2018.

46.- A fojas 400, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10778 número 9135, año 2015, de fecha 12 de febrero de 2018, de doña Marlene del Carmen González Paredes y su certificado de residencia de fecha 07 de marzo 2018.

47.- A fojas 414, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10268 número 8976, año



2015, de fecha 08 de marzo de 2018, de doña Mirta del Carmen Carvajal Droguett y su certificado de residencia de fecha 07 de marzo 2018.

48.- A fojas 428, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10706 número 9123, año 2015, de fecha 21 de febrero de 2018, de doña Mónica Isabel Martínez Salas y su certificado de residencia de fecha 27 de febrero 2018.

49.- A fojas 442, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10760 número 9132, año 2015, de fecha 05 de marzo de 2018, de doña Nadia Jeannette Vergara Ávalos y su certificado de residencia de fecha 14 de marzo 2018.

50.- A fojas 453, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10354 número 8990, año 2015, de fecha 12 de febrero de 2018, de doña Navia Fabiola Arenas Carrasco y su certificado de residencia de fecha 07 de marzo 2018.

51.- A fojas 466, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10621 número 9109, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña Paola Andrea Llorente Bahamondez y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

52.- A fojas 479, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10402 número 8998, año 2015, de fecha 28 de febrero de 2018, de doña Romina Jeanette Vergara Carrasco y su certificado de residencia de fecha 02 de marzo 2018.

53.- A fojas 492, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10549 número 9097, año 2015, de fecha 28 de febrero de 2018, de doña Rosa Elena Vargas Flores y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.



54.- A fojas 505, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10784 número 9136, año 2015, de fecha 06 de marzo de 2018, de doña Rosa Karen Inzunza Vejar y su certificado de residencia de fecha 17 de marzo 2018.

55.- A fojas 810, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10378 número 8994, año 2015, de fecha 28 de febrero de 2018, de doña Ruth del Carmen Vidal Gallardo y su certificado de residencia de fecha 15 de marzo 2018.

56.- A fojas 824, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10579 número 9102, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña Sandra Viviana González Montecinos y su certificado de residencia de fecha 07 de marzo 2018.

57.- A fojas 837, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10567 número 9100, año 2015, de fecha 13 de febrero de 2018, de doña Sara Irene Chacón Valladares y su certificado de residencia de fecha 07 de marzo 2018.

58.- A fojas 850, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10256 número 8974, año 2015, de fecha 13 de febrero de 2018, de doña Schlomit Katherine Barrera Oyarzun y su certificado de residencia de fecha 05 de marzo 2018.

59.- A fojas 864, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10597 número 9105, año 2015, de fecha 28 de febrero de 2018, de doña Silvia Vanessa Vera Henríquez y su certificado de residencia de fecha 12 de marzo 2018.

60.- A fojas 877, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10420 número 9001, año





2015, de fecha 28 de febrero de 2018, de doña Sylvia del Pilar Salazar Ramírez y su certificado de residencia.

61.- A fojas 891, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10457 número 9007, año 2015, de fecha 05 de marzo de 2018, de doña Teresita Jesús Corro Rojo y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

62.- A fojas 900, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10688 número 9120, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña Verónica de los Ángeles Cáceres Padilla y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

63.- A fojas 913, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10234 número 8970, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña Verónica del Carmen Gutiérrez Castro y su certificado de residencia de fecha 12 de marzo 2018.

64.- A fojas 926, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10280 número 8978, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña Viviana del Pilar Cáceres Padilla y su certificado de residencia de fecha 08 de marzo 2018.

65.- A fojas 939, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10573 número 9101, año 2015, de fecha 06 de marzo de 2018, de doña Viviana Elisabeth Miranda Herrera y su certificado de residencia de fecha 15 de marzo 2018.

66.- A fojas 952, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10304 número 8982, año 2015, de fecha 30 de enero de 2018, de doña Ximena del Carmen Álvarez Fernández y su certificado de residencia de fecha 19 de marzo 2018.



67.- A fojas 967, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10426 número 9002, año 2015, de fecha 09 de marzo de 2018, de doña Ximena Andrea Campos Cáceres y su certificado de residencia de fecha 22 de marzo 2018.

68.- A fojas 981, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10651 número 9114, año 2015, de fecha 07 de febrero de 2018, de doña Yessica Carolina Herrera Alarcón y su certificado de residencia de fecha 16 de marzo 2018.

69.- A fojas 995, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10323 número 8985, año 2015, de fecha 20 de marzo de 2018, de doña Yolanda Lomeli Ortiz y su certificado de residencia de fecha 23 de marzo 2018.

□70.- A fojas 1014, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10736 número 9128, año 2015, de fecha 22 de febrero de 2018, de doña Jessica Jhoana Navarro Jara y su certificado de residencia de fecha 12 de marzo 2018.

71.- A fojas 1027, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10694 número 9121 año 2015, de fecha 05 de enero de 2018, de doña Giselle Noelia Sarmiento Navarro y su certificado de residencia de fecha 14 de marzo 2018.

72.- A fojas 1040, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 11526 número 9623, año 2015, de fecha 02 de marzo de 2018, de doña Valeska Andrea Carrasco Vergara y su certificado de residencia de fecha 07 de marzo 2018.

73.- A fojas 1052, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10451 número 9006, año



2015, de fecha 15 de mayo de 2018, de doña Natalia Andrea Mendoza Riquelme y su certificado de residencia de fecha 08 de junio 2018.

74.- A fojas 1065, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10796 número 9138, año 2015, de fecha 31 de mayo de 2018, de doña Paola Alejandra Carrasco Vergara y su certificado de residencia de fecha 31 de mayo 2018.

75.- A fojas 1078, copia de Inscripción Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Miguel fojas 10366 número 8992, año 2015, de fecha 31 de mayo de 2018, de doña Katherine Soledad Carrasco Vergara y su certificado de residencia de fecha 01 de junio 2018.

76. A fojas 1172, Estudio de daños y patologías a Edificio Vista Hermosa, de fecha 5 de mayo de 2018, elaborado por el ingeniero en construcción Miguel Ángel Zenteno Vivanco.

77.- A fojas 1191, informe técnico-falencias constructivas, de fecha 27 de octubre de 2016, elaborado por la Arquitecto Lucía Angela Ríos O’Ryan.

78.- A fojas 1199, certificado de recepción definitiva de obras de edificación, de fecha 3 de diciembre de 2012, emitido por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna.

79.- A fojas 1203, copia de especificaciones Técnicas, Fondo Solidario de Vivienda, Proyecto Conjunto Vivienda Social “Vista Hermosa”.

□80.- A fojas 1157, copia de inscripción de la propiedad de doña Alejandra Andrea Rodríguez Huerta, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel a fojas 10348 número 8989, año 2015, de fecha 28 de marzo de 2018, y su certificado de residencia de fecha 28 de julio 2018.

□81.- A fojas 1231, Informe Psicológico de fecha 28 de mayo de 2018, emitido por la psicóloga doña Flor Gutiérrez.



82.- A fojas 1339, contrato de construcción y mandato, Programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios D.S.N° 174 de 2005, de fecha 25 de octubre de 2010.

83.- A fojas 1349, protocolización Acta Asamblea Extraordinaria de Socios N° 7 grupo organizado “Vista Hermosa” y Certificado de Personalidad Jurídica emitido por I. Municipalidad de la Cisterna.

84.- A fojas 1357, carta compromiso, Servicio de Vivienda y Urbanización, Unidad de Gestión de Asistencia técnica.

□85.- A fojas 1380, Resolución exenta n° 2089, de Seremi Metropolitano, Departamento de Planes y Programas, de fecha 21 octubre de 2010.

86.- A fojas 1382, copia de Permiso de edificación, Dirección de Obras I. Municipalidad de La Cisterna de fecha 3 septiembre de 2009 y su respectiva reducción a escritura pública de fecha 8 de abril de 2015

87.- A fojas 1389, copia de Resolución de modificación de proyecto de edificación, N° 121-2012 de fecha 14 de noviembre de 2012 y su reducción a escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2012.

88.- A fojas 1395, copia de Certificado de Copropiedad Inmobiliaria de la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Cisterna de fecha 23 de septiembre de 2014.

89.- A fojas 1396, copia de Reglamento de Copropiedad del Condominio Conjunto Habitacional Vista Hermosa, escritura pública de fecha 30 de junio de 2014, otorgado ante Notario Público María Gloria Acharan Toledo.

90.- A fojas 1402, copia de Certificado de Proyecto de Vivienda Social de la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Cisterna, de fecha 30 de septiembre de 2013.



91.- A fojas 1403, copia de Solicitud de modificación al catastro de bienes raíces presentado al Servicio de Impuestos Internos, de fecha 21 de febrero de 2014.

92.- A fojas 1407, copia de Formulario 2803, Declaración Jurada, cálculo del avalúo fiscal de la edificación terminada de cada unidad acogida a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, de fecha 12 de marzo de 2014.

93.- A fojas 1408 a 1413, copia de Certificado de Asignación de Roles de Avalúo en trámite, de fecha 5 de marzo de 2014.

□94.- A fojas 1362, copia de Resolución N° 7.027 del Serviu Metropolitano de fecha 11 de diciembre de 2012, que aprueba incremento del monto de subsidio del Programa Fondo Solidario de elección de vivienda para Proyecto Edificio Vista Hermosa de la comuna de La Cisterna.

95.- A fojas 1364, copia de Resolución Exenta N° 4.079 de 8 de julio de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que modifica la Resolución Exenta N° 2613 de 2010 y aprueba selección de proyectos de construcción del Fondo Solidario de Vivienda para su capítulo primero en el mes de junio del año 2010.

96.- A fojas 1369, copia de Decisión Amparo Rol C-2622 del Consejo Para la Transparencia de fecha 22 de diciembre de 2015.

**CUARTO:** Que, adicionalmente, la parte demandante, a fojas 1121, contó con prueba testimonial, consistente en las declaraciones de los testigos don Miguel Ángel Ibarra Cuellar, doña Flor Marlene Gutiérrez Valdés, don Julio César Riversa Gutiérrez y don Miguel Ángel Zenteno Vivanco quienes legalmente examinados y sin tacha expusieron:

**El primer testigo**, en cuanto al punto N° 3 de prueba, señala que es efectivo, estructurales, lo sabe ya que vive a 40 metros de las propiedades,



además de haberlo visto por televisión, tienen fallas en los techos, pasillos, patios, algunos daños dentro de los departamentos, lo sabe ya que le ha tocado concurrir en ocasiones a buscar maestros. Cuando hay lluvias se llueven los techos, patios, voladura de techumbres básicas, situación que ingresa agua a los departamentos. Le consta porque lo ha visto.

Repreguntado para que diga desde hace cuánto tiempo que se produce esta situación de inundaciones y filtraciones en el edificio, responde que 3-4 años aproximadamente.

Repreguntado para que diga en qué contexto vio o revisó las noticias emitidas en televisión respecto al edificio, qué programas y qué reportaban, afirma que en Mega con Álvaro Sanhueza y reportaban todos los daños estructurales que presentaba el edificio.

En cuanto al punto N° 7 de prueba, afirma que sí existen, ya que hay daños estructurales y psicológicos de los residentes. Agrega que en tema de montos no es experto, por lo cual no puede dar una cifra, lo sabe porque a su negocio llegan varios de los afectados a contarle de la situación.

En cuanto al punto N° 8 de prueba, responde que sí afecta psicológicamente, porque muchos de ellos son ancianos que llegan a su negocio para contarle y desahogarse de la situación.

Repreguntado para que diga si esta situación de las inundaciones y filtraciones del edificio se producen todos los años, expresa que sí, todos los años ocurren, sin tener ningún tipo de solución a la fecha.

Repreguntado para que diga si este daño psicológico que describe es a nivel colectivo de los propietarios del edificio Vista Hermosa, afirma que sí, son gente de todas las edades.



Repreguntado para que diga si el edificio vista hermosa se encuentra estigmatizado por culpa de esta situación, y en la afirmativa, qué se dice de ello, manifiesta que los tildan de La Legua Chica, Colina I, ello se ha generalizado en el sector, además fuera de él, lo ha escuchado en la locomoción colectiva.

**La segunda testigo**, en cuanto al punto N° 8 de prueba, señala que sí existe daño moral en los residentes del condominio, lo que se evidencia en diferentes reuniones con la comunidad en términos grupales e individuales, la forma de proceder fue mediante reuniones y dinámicas que le permitieron levantar la información. También utilizó un test proyectivo llamado Test De Relaciones Objetales; consiste que cada una de las personas deben relatar una historia sobre la lámina proyectada, lo que permite este test es identificar cómo las personas se relacionan con otras personas, cuáles son las defensas que utilizan y cómo reaccionan frente a diferentes situaciones de estrés, angustia, soledad, diádicas, tríadicas y grupales, su relación con la autoridad y situaciones de conflicto. Por lo tanto, esta prueba permite identificar de qué manera la situación vivida por los residentes del Edificio Vista Hermosa de la comuna de La Cisterna, viven la situación de conflicto con los defectos que presenta el edificio y cómo les afecta en su diario vivir y sus relaciones familiares y de comunidad. Concluye que efectivamente los residentes presentan un alto daño moral en el sentido de que vivencian gran malestar psicológico, diversos síntomas depresivos y ansiosos que les afecta en las distintas esferas de su vida, como en el plano personal, familiar, social y laboral, además de económico.



Repreguntada para que diga si tuvo la posibilidad de tener sesiones individuales con propietarios del edificio Vista Hermosa, en la afirmativa cuántos, señala que sí, más de 40 propietarios.

Repreguntado para que diga, en términos generales, cual fue el diagnóstico de dichas entrevistas, manifiesta que las personas presentan trastornos de tipo afectivo, con síntomas depresivos y trastornos ansiosos, derivados directamente de las consecuencias de la mala construcción de su vivienda.

**El tercer testigo**, en cuanto al punto N° 3 de prueba, sostiene que sí, es efectivo, ha vivido toda su vida en el sector y hace algunos años se empezaron a construir edificios en el sector de los cuales este le llamó la atención porque no parece habitable, parece como si no estuviera terminado y en realidad se encuentra habitado por familias, él pasa todos los días por fuera del edificio y le llamó la atención que es el único con las características que va a describir que es así. Indica que Avenida Goycolea se caracteriza por ser un río con lluvia, es una calle intransitable para los peatones y vehículos, y este edificio se encuentra bajo el nivel de la calle por unos centímetros, con amigos y familiares siempre comentan lo lamentable que es que siempre cuando llueve se inunda el edificio, además de no tener pavimento sólo tiene tierra por los costados, lo que hace que cuando llueve sale un río de barro desde el edificio, también me he dado cuenta que la gente pone plástico en varias zonas del edificio, no sabe si es porque el agua traspasa la loza o será otro desperfecto, se nota que deben tomar un sin número de medidas cuando viene el invierno, que no corresponde para una casa, le recuerdan a las casas Copeva, para un edificio tan nuevo que este tan dañado, cree que mal construido. Es lamentable que constructoras trabajen para Serviu y construyan edificios tan malos. Cuando lo





construyeron vio desde su comienzo a término, y en varias ocasiones se notaba que la obra se encontraba abandona (sic), y luego la retomaban, no sabe si era por un tema de permisos o algo. Según su criterio cuando el edificio aún no se encontraba terminado empezó a ser habitado.

Repreguntado para que describa las condiciones en que se encuentra a simple vista el techo del edificio, señala que no se encuentra, ya que se voló con el tiempo, no tiene ninguna plancha.

Repreguntado para que describa, de manera específica, qué sucede con el edificio en momentos de lluvia, responde que ha entrado en edificio, ya que le hizo un trabajo a don Juan Cerda, una vez fue a su casa y se dio cuenta que el agua desde el 5to piso cae como cascada por entremedio de las juntas de la loza que le llamó la atención porque nunca había visto que un edificio se traspasara con el agua de esa manera, eso hace que los pasillos se apocén y los pasillos y contornos siempre se inundan, el agua llega a la mitad de la canilla, no son pozas.

Repreguntado para que diga qué medidas han tomado los propietarios para sobrellevar esa situación, responde que él en un comienzo se dio cuenta, además de que le dijo don Juan, que tuvieron que juntar dinero para colocar cerámica en los pasillos para hacer un nivel y no se inundara tanto, en el techo que se voló lo tuvieron que reconstruir, pusieron una estructura metálica e intentaron colocar otro techo, no les resultó muy bien ya que se empezó a volar de a poco. En la entrada también colocaron baldosas y suelo antirresbaladizo para la rampa de acceso. También compran poliuretano para forrar el lado oriente del edificio, ya que, ese es el que se les filtra el agua a todos los departamentos del edificio.



Repreguntado para que diga si los muros externos del edificio e internos de los pasillos están completamente terminados, afirma que no, no están terminados de algo que entiende de construcción, los muros se encuentran parchados, a simple vista se ven hartas grietas y hoyos, además que en algunas partes con mezcla fueron tapando y en varios se cayó esta mezcla y se nota, hay hoyos desde 2 centímetros hasta algunos de 50 centímetros, lo que se repite en todo el exterior e interior de los dos edificios, desde la calle que se ven estos desperfectos.

Repreguntado para que diga si ha podido apreciar los sistemas de electricidad en pasillos y los tableros eléctricos externos, afirma que los pasillos no tenían ni luz ni electricidad, los vecinos juntaron dinero para colocar esas instalaciones y don Juan Cerda le pidió que lo orientara con eso, y el testigo le acotó que los tableros eléctricos no podían estar desprotegidos y hasta el día de hoy están a la intemperie, por norma la red eléctrica no puede ir expuesta al ambiente, menos al agua, lo que es un riesgo evidente para los vecinos, que la electricidad esté al lado del agua.

Repreguntado para que diga cómo le consta que, a consecuencia de las lluvias, “pasada de agua” sobrepasaba todos los pisos desde el quinto al primero, responde que le consta porque no son goteras las que se evidencian son flujos mayores de agua.

Repreguntado para que especifique si eso lo percibió de forma externa del edificio o lo percibió dentro del edificio, manifiesta que desde el exterior se percibe como el agua fluye, corre, gotea de piso a piso y también ha tenido la oportunidad de entrar a la casa de don Juan y ver de cerca este problema y durante todos los inviernos desde que se construyó.



Contrainterrogado para que diga si los daños que describe durante su declaración al interior del edificio le constan por el trabajo que realizó a don Juan en su departamento, responde que no, porque el trabajo que realizó con don Juan fue en la comuna de Cerrillos no en su domicilio particular.

Contrainterrogado para que diga por qué razón ingresó al edificio que detalla durante su declaración, expresa que en busca de materiales y cuando le pidió que lo orientara sobre el tema de instalar electricidad en los pasillos.

Contrainterrogado para que diga si recuerda en qué año se terminó de levantar el edificio, responde que no lo recuerda, porque además cree que no se terminó de levantar.

Contrainterrogado para que diga si recuerda en qué año comenzó a ser habitado, considerando ser vecino del sector, responde que como hace aproximadamente 5 a 6 años.

Contrainterrogado para que diga cuántos pisos tiene el edificio que describe en su declaración, indica que teóricamente tiene 5 pisos, pero el último es dúplex por lo que cree que deberían ser 6 pisos. En algunos casos, ya que no todos tienen 6 pisos.

Contrainterrogado para que diga cuántas veces ha visitado el edificio, indica que lo ha visitado generalmente a diario cuando pasa por fuera y cree que ha ingresado unas 6 a 8 veces. Una vez ingresó para ayudar a una señora a subir un carro al tercer piso. Las otras veces lo ha visitado por don Juan Cerda y la última vez que lo visitó fue cuando le pidieron ser testigo, solo estuvo en la entrada.

En cuanto al puno N° 7 del auto de prueba, señala que sí, por eso vino a testificar, no a venir a meterse en problemas diciendo cosas que no son. La naturaleza de los perjuicios son lo mala construcción y mal diseño del



proyecto habitacional, por el tema de montos, considerando tableros, techos, pasillos, daños a la estructura, desniveles de la loza, los muros que deslindan con los vecinos, el pavimento que debería ir en la entrada y sus contornos, las barandas, más o menos va en unos 4000 millones, pero la verdad cree que no es reparable y se debería construir de nuevo, aparte que las filtraciones ya dañaron la encerradura y la loza y eso es irreparable. Le consta porque lo ha visto y ha hablado con personas que también han estado ahí y es una apreciación general, no hay que sacar cosas para verlo están a simple vista el edificio esta deplorable.

Repreguntado para que diga el testigo, si conoce el monto demandado en esta acción de indemnización de perjuicios, responde que no.

Contrainterrogado para que diga a qué se refiere cuando señala durante su declaración a los perjuicios en los muros que deslindan con los vecinos, responde que los muros están en el aire por decirlo así, no están enterrados.

Contrainterrogado para que diga a qué muros se refiere, muros interiores o exteriores del edificio, afirma que a ninguno de los dos, se refiere de las panderetas.

En cuanto al puno N° 8 del auto de prueba, sostiene que existe un daño moral y físico a los demandantes, porque con todas esas condiciones negativas que el clima de lluvia hace que se inunde sufren enfermedades, hay muchos hongos, atenta directamente a la salud de los vecinos, en su mayoría de los de los primeros pisos, y moralmente porque de verdad que es denigrante tanto para ellos, como los vecinos ver a tanta gente viviendo en condiciones deplorables, hay varios edificios por el sector y son normales, este llega a ser anormal, también va porque el sueño de toda familia chilena es la casa, no conoce a las familias de ahí y venir de malas condiciones de vida a vivir ahí



por no tener casa propia y llegar a vivir ahí con un proyecto de vida mejor a hacer todos los esfuerzos económicos, familiares para llegar a un lugar que en realidad él no le podría llamar casa, techo ni hogar porque cree que se mojan más que estando afuera, sobre todo los vecinos del primer piso se inundan.

Repreguntado para que diga si ha tenido contacto con alguna familia o residente del edificio vista hermosa y en la cual le pueda constar ese daño moral que señala en su declaración, afirma que sí, con más de una familia, con la familia de Juan Cerda, las personas de la junta de vecinos y la vez que ayudó a la señora, le lloró todo el camino hasta su puerta de lo difícil que era para ella a su edad acceder a su hogar.

Repreguntado para que diga cómo son conocidos los habitantes del edificio Vista Hermosa, como consecuencia de las malas condiciones, expresa que la gente del sector les dicen Colina 1, es igual a la cárcel por fuera, no quiere decir que la gente de ahí sea delincuente.

Repreguntado para que diga en cuanto valoraría el daño moral sufrido por los propietarios del edificio Vista Hermosa, responde que 7000 millones de pesos, contando en 200 familias, pudieran comprarse una casa aproximada 35 millones, que es como la casa más barata que se ve en el comercio. Es lo mínimo en realidad.

Contrainterrogado para que diga qué entiende como daño moral en el contexto de los hechos sobre los cuales ha declarado, contesta que conoce que gente que se ha matado por menos, y llevar 5 a 6 años viviendo en esas condiciones cree que hay más que un daño moral, quizás también psicológico para las personas mayores y para los niños hay un daño profundo de nacer viviendo en un lugar tan deplorable y al lado tuyo tener gente que tiene una buena casa, es un daño para esos niños que están creciendo ahí, para los



adultos igual, pero principalmente los niños, porque además están hacinados, ese es un sector semi industrial. Siente que el daño moral es irreversible en etapas de la vida, en el que fue causado.

Contrainterrogado para que diga a cuántos departamentos del edificio afectado ha podido ingresar desde que éste se encuentra habitado, indica que a uno. Pero ha visto a varios ya que dejan las puertas abiertas.

El **cuarto testigo**, en cuanto al punto N° 3 de prueba, expresa que sí, presentan defectos y fallas de construcción. En cuanto a la evacuación de las aguas lluvias de los pasillos y primer nivel, no existen vías de evacuación de agua por lo que incumple directamente lo que dicen las especificaciones de construcción; los muros exteriores del edificio no cumplen con la aislación correspondiente, las ventanas exteriores no se encuentran selladas ni impermeabilizadas y no poseen el corta goteras indicado en las especificaciones técnicas, valga decir que en el itemizado de construcción aprobado para este edificio indica claramente que debe ser impermeables las ventanas, las que no son, permitiendo la entrada de agua, humedad y frío del exterior; los muros de la fachada exterior poseen en el antepecho hormigón celular, sin ningún tipo de revestimiento y con deficiencia en el encuentro con el hormigón armado, en las especificaciones técnicas indican que la fachada llevaba revestimiento *siding*, lo cual no se encuentra. Todo lo anterior le consta por visita a terreno y la observación in situ de las deficiencias, para lo cual también existe un registro fotográfico en el informe de estudio de daños y patologías del edificio vista hermosa, el cual fue diseñado por el testigo.

Repreguntado para que diga si las fallas que enumera en su informe y en su actual declaración, cómo se ven reflejados en la especie en un contexto de lluvias, responde que esto sería para la comunidad en general, dificultad o



imposibilidad de acceder a los departamentos, riesgos de caídas y accidentes por acumulación de agua en los pasillos, deterioro en la calidad de vida por exposición a la humedad y bajas temperaturas. Lo que conlleva riesgo de enfermedades.

Repreguntado para que explique, para efectos prácticos, cuál es la diferencia en que una fachada se realice en cuanto a los muros exteriores con hormigón celular versus revestidos de *siding*, expresa que en este caso puntual, existe una gran diferencia en cuanto a impermeabilidad, si se hubiera realizado con un revestimiento de *siding* no ocurrirían filtraciones ni en los muros ni en las ventanas, además que en este caso particular el hormigón celular de los antepechos no fue colocado de forma correcta, lo cual deja claramente filtraciones del exterior al interior de los departamentos.

Repreguntado para que diga, al hacer mención a la ventana externa, cuál es la consecuencia entonces de que exista falta de sello e inexistencia de corta goteras para efectos prácticos, indica que no se produce la aislación térmica deseada, haciendo que se escape el calor en invierno y entre el calor en verano, requiriendo en el caso de la ciudad de Santiago, mayor consumo energético, gastos en calefacción y potenciales enfermedades por la humedad exterior que entra a los hogares, y el agua que entra directamente de la lluvia al interior.

Repreguntado para que diga cuál es la consecuencia de que en la entrada de acceso y en el sector del primer piso no posea un adecuado sistema de drenaje de las aguas para su evacuación, señala que partiendo que es contrario a la norma de construcción, lo que sucede en el edificio no debería suceder en ningún caso, obviamente esta acumulación de agua impide a la gente acceder al departamento, al ocurrir en el sector de la entrada del edificio



todos deben circular por ahí, lo que lo imposibilita u obliga al usuario a mojarse aumentando el riesgo a las enfermedades, obviamente empeorando la calidad de vida y en el caso con gente con dificultad de movimiento y/o enfermedades crónicas les significa enclaustramiento.

Repreguntado para que diga si realizó un estudio de daños al edificio Vista Hermosa, responde que sí.

Repreguntado para que diga si para realizar el informe concurre al edificio Vista Hermosa ubicado en avenida Goycolea N° 467, comuna de La Cisterna, afirma que sí.

Repreguntado para que diga si evidenció en esa visita daños respecto al techo del edificio, expresa que los aleros que corresponden a los pasillos, se encontraban en total deterioro y completamente disfuncionales. Además, el techo de la sala de basura presentaba un agrietamiento y desprendimiento de cielo.

Repreguntado para que diga a qué se refiere con aleros disfuncionales, manifiesta que la función del alero es impedir que las aguas lluvias caigan en los pasillos, función que no están cumpliendo debido al deterioro. Eso permite que el agua de los pasillos ingrese a los departamentos por las puertas de entrada.

Repreguntado para que diga, respecto a lo que evidenció, cómo se encontraban al momento de hacer su estudio las terminaciones del edificio, responde que el edificio no posee terminaciones de ningún tipo, ni pintura ni revestimiento.

Repreguntado para que diga, al hacer este informe, con qué documentos municipales o del SERVIU directamente utilizó para ello, señala que la norma chilena de la construcción, las especificaciones técnicas de construcción que





están disponibles en la dirección de obras municipales, el itemizado técnico de construcción, que es el documento aprobado por Serviu para la construcción de estos edificios.

Agrega que los planos, ensayos de laboratorio, libro de obra y otros documentos no se encontraban presentes al ser solicitados a la municipalidad, los planos disponibles solo abarcaban el área eléctrica.

Repreguntado para que diga si en su estudio de daños del edificio evidencio algún otro problema al interior de algún departamento que haya revisado, indica que no, solo testimonios.

Repreguntado para que diga si con la documentación revisada y con el estudio en terreno, el edificio cumplió con las especificaciones técnicas y por ende con la normativa vigente, sostiene que no cumple.

Contrainterrogado para que diga si tiene conocimiento del tiempo de construcción o antigüedad del edificio que dice haber inspeccionado, afirma que en la documentación que revisó están las fechas, no las recuerda, pero sabe que están en la documentación de entrega del edificio.

**QUINTO:** Que, en audiencia de percepción llevada a efecto con fecha 28 de enero de 2020, cuya acta consta a fojas 1510 se percibió el siguiente documento presentado por la parte demandante, el que se tuvo por acompañado:

1.- Video denominado “Vecinos de Conchalí aseguran que viven en las nuevas casas Copeva”. Se deja constancia de que al ingresar en el archivo es posible establecer que contiene un video del programa matinal “La Mañana”, emitido por el canal Chilevisión, que corresponde a un reportaje individualizado como “¿Las nuevas “casas Copeva”? Dptos. tienen filtraciones y hongos!”, referente al Conjunto Habitacional “Vista Hermosa”



de la comuna de La Cisterna, con una duración de 15:43 minutos, video que se observa y escucha sin problemas.

**SEXTO:** Que, por su lado, la demandada Serviu Metropolitano acompañó los siguientes documentos:

1.- A fojas 1255, copia de Certificado de Declaratoria de Utilidad Pública del inmueble ubicado en calle Goycolea N° 467-B, de fecha 10 de octubre de 2007.

2.- A fojas 1256, copia de Certificado de Declaratoria de Utilidad Pública del inmueble ubicado en calle Goycolea N° 467-A, de fecha 10 de octubre de 2007.

3.- A fojas 1257, copia de Certificado de Informaciones Previas, emitido por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, de fecha 24 de julio de 2009.

4.- A fojas 1263, copia de Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios N° 7 Grupo Organizado “Vista Hermosa”, de fecha 17 de agosto de 2009, donde los demandantes acordaron ratificar a la EGIS Creativa para que actuase como entidad organizadora de su proyecto.

5.- A fojas 1269, copia de Certificado emitido por la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, con fecha 18 de agosto de 2009, respecto de la constitución del “Comité para la vivienda Vista Hermosa”.

6.- A fojas 1270, copia de Carta Compromiso suscrita en octubre de 2009 entre la EGIS Creativa y el comité para la vivienda “Vista Hermosa”, donde expresan su voluntad de realizar el proyecto Edificio Vista Hermosa.

7.- A fojas 1271, copia de Protocolización de Acta de Asamblea Extraordinaria Grupo Avanzado “Vista Hermosa”, de fecha 2 de octubre de 2009.



8.- A fojas 1272, copia simple de Contrato de Construcción y Mandato Programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios D.S N° 174 (V. y U) de 2005, de fecha 25 de octubre de 2010, suscrito entre EGIS Creativa y la constructora.

9.- A fojas 1282, copia simple de las Especificaciones Técnicas del Proyecto Vista Hermosa, de fecha 23 de noviembre de 2010.

10.- A fojas 1296, copia simple de documento denominado “Memoria Explicativa”, del Edificio Vista Hermosa.

11.- A fojas 1297, copia simple de Formulario Caratula Proyecto Fondo Solidario de Vivienda Construcción Nuevos Terrenos.

12.- A fojas 1298 a 1319, dossier de fichas de post-venta, emitidas por la constructora Civil Work y suscritas por las siguientes personas: María Marcela Vives Valdés, Paola Andrés Llorente Bahamondez, Sandra Viviana González Montecinos, Evelyn Andrea Matus Jiménez, Alicia Julia Lizama Fuentes, Verónica de los Ángeles Cáceres Padilla, Elizabeth Andrea Avendaño Salazar, María Cecilia Labarca González, Jessica Johanna Navarro Jara, Fernando Andrés Contreras Miranda, Marcia Andrea Pino Rivera, Alba María Abarca González, Verónica del Carmen Gutiérrez Castro, Navia Fabiola Arenas Carrasco, Elena del Pilar Meliñan Ponce, Viviana del Pilar Cáceres Padilla y Carol Gloria Cáceres Padilla.

13.- A fojas 1323, copia de Carta suscrita por don Cristian Durán Elicer, arquitecto de EGIS Creativa, con fecha 20 de noviembre de 2013, donde informa a Serviu, que la constructora Civil Works cumplió con las observaciones de post-venta del edificio Vista Hermosa.

14.- A fojas 1324, copia de Solicitud de Boleta de Garantía, donde consta su devolución con fecha 11 de diciembre de 2013.



15.- A fojas 1325, copia simple de Oficio Interno N° 2 de fecha 12 de noviembre de 2013, donde se informa al encargado de la unidad de post-venta, que a la fecha de cierre de la post-venta, no se recibió reclamo alguno.

16.- A fojas 1326, copia de Contrato de Servicios de Inspección Técnica, suscrito por SERVIU con TXUS-Villarreal y Anriquez Limitada, con fecha 1 de octubre de 2011, donde se encarga a la segunda la inspección técnica de las obras del Edificio Vista Hermosa.

17.- A fojas 1330, Res. Ex. 2106, de fecha 20 de abril de 2015, de SERVIU donde se liquida el contrato suscrito con la empresa TXUS-Villarreal y Anriquez Limitada.

18.- A fojas 1332, Res. Ex. 7746 de fecha 26 de diciembre de 2011, que aprueba el contrato suscrito con la empresa técnica aludida.

**SÉPTIMO:** Que, la demandada Serviu Metropolitano, a fojas 1139, también contó con prueba testimonial, consistente en la declaración del testigo don Jorge Antonio Catalán Cordero, quien legalmente examinado y sin tacha acogida expuso:

El cuanto al punto N° 2 de prueba, señala que de conformidad con la normativa vigente, al proyecto en cuestión corresponde que la EGIS haga ingreso por oficina de partes, ante el Serviu Metropolitano de la solicitud de devolución de boleta bancaria de garantía de la buena ejecución de la obra. Para proceder a dicha devolución, Serviu Metropolitano debe estar en conocimiento y en poder de los antecedentes necesarios que indiquen que efectivamente el período de posventa se realizó y entonces puede proceder a dicha devolución. Lo antes declarado lo sabe y le consta, porque le correspondió participar al final del período posventa legal, en dicho proyecto ya que habían surgido una denuncia ante la televisión abierta en Magnavisión



(sic) y en aquella ocasión se le encomendó visitar el proyecto e informar a sus superiores directos.

Repreguntado para que diga si sabe cuál es el plazo legal de posventa, responde que de un año.

Repreguntado para que diga si sabe a quién corresponden las reparaciones en el período de posventa, afirma que le corresponden al propietario primer vendedor, que en este caso es la EGIS junto con la constructora.

Contrainterrogado para que diga la fecha exacta en que el Serviu declaró concluido el período de posventa, responde que cuando devolvió la boleta. La fecha exacta no la sabe, porque eso no corresponde a sus funciones.

Contrainterrogado para que diga cuáles eran esos antecedentes necesarios que menciona en su declaración, para acceder a la conclusión del período de posventa, indica que algunas herramientas de control que indiquen las reparaciones efectuadas por parte de la empresa constructora y a su vez también la declaración del propietario. Cuando se refiere a herramientas técnicas, afirma que cada empresa constructora debe tener para participar en las propuestas de construcción de viviendas, equipos de auto control, tal como lo establece la ISO 9.000. Cada empresa difiere en cuanto a la metodología que aplica para el aseguramiento de la calidad, así como también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha establecido una herramienta de control y aseguramiento de la calidad, que las empresas constructoras deben adecuar a la realidad del proyecto que ejecutan. El documento exacto se llama “manual de inspección técnica” y forma parte integrante de los contratos de obras y está a libre disposición en los acuerdos. Una de ellas es la planilla *excel* y programas computacionales de control de obras.



Contrainterrogado para que diga quién es el encargado de velar para que se cumpla con la norma y su ISO 9.000, responde que los encargados de velar por el cumplimiento de las bases técnicas y administrativas del contrato son: cuando se habla de norma ISO 9.000, se está hablando de procedimientos y acciones que deben ser capaces de hacerse seguimientos. Por lo tanto, la calidad de los proyectos debe ser asegurada desde el momento de su concepción, si el proyecto sea cual sea, fue concebido con algún error, obviamente una vez al ser plasmado en la realidad, aflora aquella deficiencia que no fue tomada en consideración al momento de su concepción, por lo tanto, quienes participan en el establecimiento de un buen producto final son: 1.- Arquitectos proyectistas, 2.- Calculistas estructurales, 3.- Proyectistas eléctricos, 4.- Proyectistas sanitarios, 5.- Mecánicos de suelo, 6.- Supervisor Serviu, 7.- Inspección técnica contratada, 8.- Empresas constructoras en conjunto con su equipo de auto control.

Sostiene que todos estos son los encargados de aportar sus conocimientos en sus respectivas áreas y de conformidad a lo establecido en la Ley general de construcción y en la ordenanza respectiva.

Contrainterrogado para que diga quién contrata o a qué institución pertenecen los profesionales anteriormente mencionados, como por ejemplo el arquitecto proyectista, responde que supone que será la EGIS en conjunto con los beneficiarios.

Contrainterrogado para que diga quién fue el encargado de fiscalizar la calidad de la construcción, del edificio Vista Hermosa de La Cisterna, responde que no participó en esa etapa.



Contrainterrogado para que diga, en atención a su declaración, si visitó el proyecto Vista Hermosa, antes de la denuncia hecha en televisión, indica que no.

**OCTAVO:** Que, por último, la demandada Municipalidad de La Cisterna acompañó los siguientes documentos:

1.- A fojas 105, certificación del número de profesionales que integran la Dirección de Obras Municipales.

2- A fojas 106, informe del Director de Obras de la Municipalidad de La Cisterna, en que indica los profesionales que participaron en la recepción final de la obra en cuestión.

**NOVENO:** Que, a fojas 1144, la demandada Municipalidad de La Cisterna también contó con prueba testimonial, consistente en la declaración de la testigo doña Catalina Lisette Torres López, quien legalmente examinada y sin tacha acogida expuso:

En cuanto al punto N° 4 de prueba, señala que la fiscalización que realiza la Municipalidad de la Cisterna, a través de su Dirección de Obras, se realiza al momento de la recepción final, es en este momento en que la Dirección de Obras visita la construcción y constata que se haya ejecutado de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. Agrega que en este momento la obra ya se encuentra terminada, por lo tanto, no se puede constatar la calidad de los materiales y la calidad del proceso constructivo, solamente con la vista.

Añade que para poder certificar la calidad de dicho proceso y materiales, por los profesionales competentes, la ordenanza general de urbanismo y construcciones solicita la presentación de documentos técnicos que acrediten dichas calidades. Presentados los documentos y posterior a la



visita, si se encuentra todo en orden, se procede a otorgar la recepción final de la edificación. Por lo antes dicho, la municipalidad queda sujeta a la acreditación que entregan los profesionales asociados e involucrados en la construcción.

Precisa que lo antes declarado lo sabe y le consta, porque es parte de su trabajo, por lo tanto, sabe el procedimiento.

Repreguntada para que diga si conoce el proceso de fiscalización respecto de las construcciones efectuadas bajo subsidio otorgados por el Serviu, contesta que tiene conocimiento de que Serviu a través de su EGIS tienen un control mediante inspecciones técnicas bastantes acuciosas, esto le consta desde que trabaja en la municipalidad.

Repreguntada para que diga si en el proceso antes descrito, tiene o debe tener participación la Dirección de Obras, en este caso de la Municipalidad de La Cisterna, afirma que la dirección de obras actúa en el momento de la presentación del permiso de edificación, donde se revisa por la parte de la Dirección de Obras, solo normas urbanísticas, una vez cumplidas éstas se otorga el permiso de edificación, que permitirá la construcción.

Agrega que una vez terminada la construcción, se procede a la recepción final.

Repreguntada para que diga quién o quiénes estuvieron a cargo de la fiscalización o elaboración de planos y especificaciones técnicas, señala que de un proyecto de edificación, actúan profesionales particulares, la Dirección de Obras revisa el cumplimiento normativo a nivel de proyecto.

Repreguntada para que diga quién es el ente encargado de calificar la calidad de la construcción y materiales ocupados en la misma, manifiesta que el inspector técnico de obras ITO, a través de la fiscalización de este





profesional, se solicitan muestreo de diversos materiales, como por ejemplo hormigones que luego son derivados a laboratorios establecidos como Idiem o Dictuc para garantizar el cumplimiento de lo señalado en planos y especificaciones técnicas.

Repreguntada para que diga si sabe, en el caso del Condominio Vista Hermosa, a cargo de quién se encontraba el ITO o inspector de obras antes referido, y de cargo de quien era la contratación de los laboratorios mencionados, responde que tiene entendido que en este caso la contratación del ITO fue por parte de la constructora y el cargo de los laboratorios también es de la constructora.

Repreguntada para que diga si en su experiencia profesional como arquitecta, podría indicar, si de la sola vista o inspección ocular de un proyecto determinado, se pueden constatar defectos del fondo de la constructibilidad, de acuerdo a la revisión descrita en el punto dos, donde se refiere a la fiscalización municipal, afirma que no, defectos de fondo no se pueden constatar, todo esto referido a obra gruesa.

Repreguntada para que diga si en caso de constatarse posteriormente defectos de construcción, ante quién se debe interponer el reclamo respectivo, y si conoce el plazo para realizar dicha acción, indica que se interpone ante el primer vendedor, es decir, la inmobiliaria en el ámbito privado, quien es el que gestiona todo el proyecto. En este caso es la EGIS, entiende que el plazo son diez años.

Contrainterrogada para que diga la testigo si participó en la fiscalización de la obra Vista Hermosa, responde que no.

Contrainterrogada para que diga y explique en forma resumida, el proceso de construcción de viviendas sociales y quiénes son las entidades que



participa, señala que no experta en el tema, pero según tiene entendido las viviendas sociales se postulan a través de Comités a Serviu que gestiona el desarrollo del proyecto a través de la EGIS, quien se encarga del proyecto y la construcción.

Contrainterrogada para que diga quién es el encargado de crear o de elaborar las especificaciones técnicas y quién las aprueba, señala que las aprueba la Dirección de Obras Municipales y las elabora la entidad de Gestión Inmobiliaria Social.

Contrainterrogada para que diga, según la fiscalización de obras municipales, si se cumplieron a cabalidad las especificaciones técnicas, indica que no tiene cómo saberlo porque no participó de la fiscalización.

Contrainterrogada para que diga si a simple vista, según la declaración, se puede observar de qué está hecha la fachada exterior del edificio, afirma que depende de la terminación del muro exterior, si éste es estucado, difícilmente a simple vista se puede determinar la materialidad, en caso de no estar estucado, sí se puede saber.

Contrainterrogada para que diga de qué material está hecha la fachada exterior del edificio Vista Hermosa, responde que no lo sabe.

Contrainterrogada para que diga qué documentos técnicos revisó la Dirección de Obras que acreditó la calidad de los materiales utilizados en la generalidad de las obras, incluidas la Vista Hermosa, responde que en general se revisa la documentación que acredite la calidad de hormigones, pinturas intumecentes, que si fuere el caso, informes de inspección técnica también si fuera el caso, declaración de los profesionales competentes de que las obras se construyeron conforme al permiso aprobado, certificación de instalaciones



(agua potable, alcantarillado, electricidad y gas), recepción de pavimentos exteriores, libro de obras, informe de evacuación aprobado por Bomberos.

Contrainterrogada para que diga si sabe cuántas fiscalizaciones realizó la dirección de obras antes de la recepción final, si se confeccionan informes, y si estos son firmados por todos los profesionales a cargo, responde que no sabe.

Contrainterrogada para que diga si sabe o conoce si los propietarios del edificio Vista Hermosa se acercaron a la municipalidad a buscar soluciones respecto a los problemas de inundaciones u otros que han sufrido hasta el día de hoy por los temporales, señala que sí.

Contrainterrogada para que diga si la municipalidad en general ha tomado alguna medida respecto de ello, responde que no lo sabe.

Contrainterrogada para que diga, en atención a su declaración respecto a la EGIS, quién es el ente fiscalizador a cargo de la EGIS, señala que no lo sabe.

**DÉCIMO:** Que, finalmente, con fecha 23 de abril de 2021, se dictó una medida para mejor resolver, teniéndose por acompañados los siguientes documentos:

1.- A fojas 1545, copia de Inscripción Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel de fojas 10676 número 9118 del año 2015, de fecha 22 de febrero de 2018, de doña Carolina Muñoz Moya.

2.- A fojas 1557, copia de certificado de residencia de doña Carolina Muñoz Moya de fecha 08 de marzo 2018.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que son hechos de la causa por no encontrarse controvertidos por las partes y hallarse refrendados por la instrumental aparejada al proceso, los siguientes:



1.- Con fecha 25 de octubre de 2010, entre don Patricio Durán Elicer, mandante, en su calidad de representante legal de la entidad de gestión inmobiliaria social o EGIS Creativa; don Alfredo Antonio Toledo Correa, representante legal de la empresa Constructora Civil Works Ltda., el constructor; y don Claudio Moscoso Carvajal en su calidad de representante del grupo organizado Comité Para la Vivienda Vista Hermosa, se celebró contrato de construcción y mandato para Programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, conforme las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 174 de Vivienda y Urbanismo del año 2005 y sus modificaciones, en razón del cual se ordenó la construcción del Proyecto de viviendas sociales “Edificio Vista Hermosa”, ubicado en Avenida Goycolea N° 467, comuna de La Cisterna.

2.- Con fecha 3 de diciembre del año 2012, la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna emitió el certificado de recepción definitiva de obras del edificio.

3.- Con fecha 12 de noviembre de 2013, se emitió el oficio del encargado de Unidad de postventa del Serviu Metropolitano al Jefe de Departamento de Obras y Edificación, dándose por concluida la etapa de postventa.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que los demandantes interponen en autos demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Serviu Metropolitano y de la Municipalidad de La Cisterna. Indican que son dueños de viviendas sociales pertenecientes al proyecto Edificio Vista Hermosa, ubicado en Avenida Goycolea N° 467, comuna de La Cisterna.

Sostienen que ambos organismos incurrieron en falta de servicio en razón de su intervención en la ejecución del proyecto, causándole una serie de



perjuicios derivados de fallas y defectos presentes en la construcción del edificio.

Así, en cuanto al Serviu Metropolitano, afirman que la sola circunstancia de existir un extenso catálogo de desperfectos en el edificio, ponen al descubierto la deficiente gestión de fiscalización y supervisión técnica en que incurrió el Serviu Metropolitano.

En cuanto a la Municipalidad, precisan que el estado actual del edificio es el fiel reflejo del incumplimiento por parte de la Municipalidad demandada de las obligaciones que recaen en ella como ente encargado de la fiscalización en el cumplimiento de la normativa técnica aplicable a la calidad de la construcción.

Por su lado, el Serviu Metropolitano se defiende indicando primeramente que la responsabilidad de su parte se encontraría prescrita. Sostiene luego que en la demanda no se indica cuál sería la falta de servicio en la que el Serviu habría incurrido. Alega también que no se especifica qué relación causal existiría entre el actuar del Serviu y la mala calidad de la construcción del edificio. En cuanto a la solidaridad demandada, alega que no existe norma legal que la establezca tratándose de responsabilidad por falta de servicio. Por último, señala que su parte no reconoce la naturaleza ni el monto de los perjuicios reclamados, y de estimarse procedente debe serlo en una suma muy inferior a la demandada.

A su turno, la demandada Ilustre Municipalidad de La Cisterna se defiende oponiendo la excepción de prescripción, fundada en que habría transcurrido el plazo de 4 años establecido en la ley para la responsabilidad en comento. En subsidio de lo anterior, alega que no es de competencia de su parte la construcción ejecutada ni su supervisión técnica. En subsidio de lo



anterior, opone la excepción de imposibilidad material de cumplimiento de obligación legal, señalando que la municipalidad no está en condiciones de hacer una revisión profunda y detalladas de las obras que recibe. En subsidio de lo anterior, alega la falta de fundamento jurídico de la acción de autos, afirmando que los actores no señalan cómo opera la falta de servicio generando el daño que se invoca. Por último, también en subsidio de las alegaciones anteriores, solicita se reduzca el daño a indemnizar.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, primeramente, en cuanto a la excepción de prescripción opuesta por los demandados, ambas la fundan en que en el caso debe aplicarse el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil para las acciones de responsabilidad extracontractual, esto es, de 4 años contados desde la perpetración del acto.

Precisan al efecto que la obra en cuestión fue recepcionada el día 3 de diciembre de 2012, por lo que a la fecha de notificación de la demanda el 2 de marzo de 2017, según lo alegado por el Serviu Metropolitano, e incluso a la fecha de su interposición el 9 de diciembre de 2016, según lo alegado por la Municipalidad de La Cisterna, la acción se encontraba prescrita.

Por su parte, los actores solicitan el rechazo de la excepción, indicando que los hechos objeto del litigio y que ocasionaron los perjuicios demandados se produjeron durante el temporal de junio de 2013, por lo que es desde dicha época que debe contarse el plazo de prescripción aplicable. Agregan que, de todos modos, los demandantes recibieron el título de propietarios de los departamentos sólo el segundo semestre de 2015, por lo que antes se encontraban impedidos de ejercer acciones que les competen en forma exclusiva a los propietarios.



**DÉCIMO CUARTO:** Que, al efecto, resulta necesario tener presente que en nuestro ordenamiento no se encuentra regulado expresamente el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad por falta de servicio, razón por la cual debe estarse a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, a propósito de la responsabilidad extracontractual, norma que dispone que las acciones concedidas por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en cuanto al momento desde el cual debe hacerse el cómputo del plazo de prescripción de una acción de indemnización de perjuicios por falta de Servicio, es dable indicar que dicho plazo sólo puede contarse desde que concurren todos los presupuestos que configuran la acción y la misma se encuentra disponible para ser ejercida por la parte demandante.

De esta manera, en el caso de autos, dicho término debe contarse desde la manifestación del daño, que es cuando se evidenciaron los defectos alegados en la demanda, lo que habría ocurrido desde junio de 2013, fecha en que habría ocurrido el temporal descrito por los actores.

Adicionalmente, debe recordarse que sólo la notificación válida de la demanda interrumpe civilmente el plazo de prescripción, de acuerdo a lo que establecen los artículos 2503 y 2518 del Código Civil.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, de acuerdo con lo expuesto, las demandadas indicaron como época de inicio del plazo de prescripción para la acción de autos una fecha anterior a la que correspondía, por lo que, atendido el carácter estricto de la institución que se revisa, y siendo de su carga acreditar los fundamentos en que se apoya, resultará forzoso el rechazo de la excepción.

Que, sin perjuicio de que lo anterior resulta suficiente para desestimar la excepción alegada, en cuanto a la Municipalidad de La Cisterna, que la



demanda fue notificada a su respecto con fecha 22 de junio de 2017, según puede observarse en el estampado receptorial que consta en autos a fojas 102, por lo que no es posible determinar si a dicha fecha había transcurrido el plazo de prescripción desde que se manifestaron los daños alegados en el libelo, situándolos en junio de 2013, correspondiendo a quien alega la excepción probar sus supuestos.

A su turno, en cuanto a la demandada Serviu Metropolitano, la demanda le fue notificada el día 2 de marzo de 2017, según consta en el estampado que rola a fojas 62, de manera que a dicha fecha no había transcurrido el plazo de 4 años establecido para la prescripción de la acción incoada.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, resueltas las excepciones de prescripción incoadas, cabe referirse al marco jurídico aplicable a la falta de servicio alegada en autos.

Que, primeramente, cabe señalar que el artículo 1 de la Ley N° 18.695 o Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, prescribe: “La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.”

Por su lado, el artículo 24 de la ley referida, en sus letras a) y b), establece: “A la Unidad encargada de obras municipales corresponderá:

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas





correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas:

1) Dar aprobación a las fusiones, subdivisiones y modificaciones de deslindes de predios en las áreas urbanas, de extensión urbana, o rurales en caso de aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

2) Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y edificación y otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de que éstos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

3) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y

4) Recibirse de las obras y autorizar su uso, previa verificación de que éstas cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

b) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rija.”

A su vez, el artículo 152 de la ley comentada dispone que las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, también resulta necesario tener presente que el DFL 458 o Ley General de Urbanismo y Construcciones, establece en su artículo 8, inciso primero: “En todas las Municipalidades se consultará el cargo de Director de Obras, que deberá ser desempeñado por un profesional con título universitario.”



Agrega la letra a) del artículo 9 de la misma ley: “Serán funciones del Director de Obras:

a) Estudiar los antecedentes, dar los permisos de ejecución de obras, conocer de los reclamos durante las faenas y dar recepción final de ellas, todo de acuerdo a las disposiciones sobre construcción contempladas en esta ley, la Ordenanza General, los Planes Reguladores, sus Ordenanzas Locales y las Normas y Reglamentos respectivos aprobados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.”

Por otro lado, también resulta necesario recordar que la misma ley, en su artículo 18, incisos primero al quinto, prescribe: “El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes sean responsables de las fallas o defectos de construcción que hayan dado origen a los daños y perjuicios. En el caso de que la construcción no sea transferida, esta responsabilidad recaerá en el propietario del inmueble respecto de terceros que sufran daños o perjuicios como consecuencia de las fallas o defectos de aquélla.

El arquitecto que realice el proyecto de arquitectura será responsable de cumplir con todas las normas legales y reglamentarias aplicables a dicho proyecto y por los errores en que haya incurrido en el ejercicio de sus funciones, si de éstos se han derivado daños o perjuicios.

El profesional competente que realice el proyecto de cálculo estructural, incluidos los planos, la memoria de cálculo, especificaciones técnicas y el estudio de geotecnia o mecánica de suelos, será responsable de cumplir con todas las normas aplicables a estas materias y por los errores en que haya



incurrido, en el ejercicio de sus funciones, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. En los casos en que el estudio de mecánica de suelos sea realizado por un profesional competente diferente, este estudio será de su exclusiva responsabilidad.

Sin perjuicio de lo establecido en el N° 3 del artículo 2003 del Código Civil, los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos en la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y el uso de materiales o insumos defectuosos, sin perjuicio de las acciones legales que puedan interponer a su vez en contra de los proveedores, fabricantes y subcontratistas.

El inspector técnico de obra (ITO) será responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas de construcción aplicables en la materia y al permiso de construcción aprobado y sus modificaciones, así como al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de cálculo estructural y su memoria, y los proyectos de especialidades, incluidos los planos y especificaciones técnicas correspondientes.”

**DÉCIMO NOVENO:** Que, en cuanto al Serviu Metropolitano, debe indicarse que con la promulgación de la Ley N° 18.575 o Ley de Bases de la Administración del Estado, se incorporó al Derecho Público chileno el sistema de la responsabilidad extracontractual del Estado, que en su artículo 44 dispone que “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio.

No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”.

Por su parte, el artículo 1 de la citada ley estableció como parte de la Administración del Estado a los servicios públicos creados para el



cumplimiento de la función administrativa, agregando el artículo siguiente que los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes, y que todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.

Por su lado, el artículo 5 del Decreto Ley N° 1305, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, establece que: “Corresponderá a los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización la ejecución de los planes que haya aprobado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”. Así, el inciso primero del artículo 25 dispone que: “Los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización son instituciones autónomas del Estado, relacionadas con el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con personalidad jurídica, con patrimonio distinto del Fisco, de duración indefinida, de derecho público y ejecutores de las políticas, planes y programas que ordene directamente el Ministerio o a través de sus Secretarías Ministeriales”.

Agrega el artículo 27 que: “Los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización estarán encargados, en su jurisdicción, de materializar los planes que les encomiende el Ministerio, para lo cual podrán adquirir los terrenos, formar loteos y preparar subdivisiones prediales, proyectar y ejecutar las urbanizaciones de los mismos, proyectar y ejecutar las remodelaciones y la edificación de las poblaciones, conjuntos habitacionales, barrios o viviendas individuales y su respectivo equipamiento comunitario y toda otra función de preparación o ejecución que permita dar cumplimiento a las obras contempladas en los planes y programas, todo ello en conformidad con los presupuestos asignados”.



Señala a su vez el inciso primero del artículo 28 que “Para la consecución de los fines antes señalados, los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización encomendarán la ejecución de las obras que proyecten, tanto de urbanización como de edificación y habilitación de áreas o de equipamiento, de conformidad a la legislación habitacional vigente”.

**VIGÉSIMO:** Que, por otra parte, el Decreto Supremo N° 355 de 1976 del Minvu, que Aprueba el reglamento orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, prescribe en su artículo 2: “El SERVIU será en su jurisdicción, el organismo ejecutor de las políticas, planes y programas que disponga desarrollar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y, como tal, no tendrá facultades de planificación” y en su artículo 3 que: “El SERVIU estará encargado de adquirir terrenos, efectuar subdivisiones prediales, formar loteos, proyectar y ejecutar urbanizaciones, proyectar y llevar a cabo remodelaciones, construir viviendas individuales, poblaciones, conjuntos habitacionales y barrios, obras de equipamiento comunitario, formación de áreas verdes y parques industriales, vías y obras de infraestructura y, en general, cumplir toda otra función de preparación o ejecución que permita materializar las políticas de vivienda y urbanismo y los planes y programas aprobados por el Ministerio”.

Agrega el artículo 23 que, entre otras, “Serán funciones y atribuciones de este Departamento: b) Proyectar y construir, por cuenta propia o de terceros, “viviendas económicas”, campesinas, villorrios agrícolas, áreas verdes y parques industriales, locales comerciales, equipamiento comunitario y edificios escolares o destinados a servicios públicos; f) Confeccionar planos, tipos o modelos de "viviendas económicas", mínimas, progresivas, sociales,



etc., y planos tipos del equipamiento comunitario que corresponda, con sus respectivas especificaciones y cálculos, con el fin de que se proporcionen en forma permanente a los interesados que lo soliciten, fijándoles precios accesibles a los grupos de más bajos ingresos;”

Por otro lado, cabe tener presente lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 174 del año 2005 del Minvu, que reglamenta el programa Fondo Solidario de Vivienda, programa en virtud del cual se construyó el proyecto Edificio Vista Hermosa materia del presente juicio.

Así, el artículo 1 de dicho reglamento, en sus incisos primero y segundo, señala que: “El programa regulado por el presente reglamento está destinado a dar una solución habitacional preferentemente a las familias del primer quintil de vulnerabilidad. Tratándose del Programa Fondo Solidario de Vivienda II, regulado por el Capítulo Segundo, y de Proyectos de Construcción Colectiva en Zonas Rurales, estará destinado preferentemente a la atención de familias del primer y segundo quintil de vulnerabilidad.

El MINVU, directamente o a través del SERVIU, otorgará mediante este sistema de atención, un subsidio destinado a financiar la adquisición o construcción de una vivienda.”

Por último, debe considerarse a su vez lo dispuesto en la resolución N° 533 de 1997 del Minvu, que fija el procedimiento para prestación de servicios de asistencia técnica y social a programas de vivienda.

El artículo preliminar de dicho reglamento define a la Entidad(es) de Gestión Inmobiliaria Social o EGIS como: “personas jurídicas, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que prestan los servicios de asistencia técnica y social que se señalan en la presente resolución para el



programa Fondo Solidario de Vivienda, regulado por el D.S. N° 174 (V. y U.), de 2005”.

Por su lado, define a la Inspección Técnica de Obras o ITO como “la labor de inspección de las obras que forman parte del proyecto habitacional, la que debe ser realizada directamente por el SERVIU o contratada al efecto por éste”.

En cuanto al Inspector Técnico de Obras, el mismo artículo lo define como “profesional o profesionales del SERVIU o, en su caso, personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Consultores regulado por el D.S. N°135 (V. y U.), de 1978, en el Rubro IV, Rubro Prestaciones de Asistencia Técnica, Especialidad Gestión de Proyectos Habitacionales, Subespecialidad 2201, Inspección de Obras, contratadas por el SERVIU mediante un proceso de licitación, que tendrán a su cargo la inspección técnica de las obras comprendidas en el proyecto habitacional postulado al programa Fondo Solidario de Vivienda regulado por D.S. N°174 (V. y U.), de 2005 o al Sistema de Subsidio Habitacional Rural regulado por el D.S. N°117 (V. y U.), de 2002.”

Por su parte, el N° 2 del artículo 1 refiere que: “Los SERVIU, con cargo a los fondos asignados al efecto por la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año respectivo, financiarán la prestación de servicios de asistencia técnica y social y, en su caso, contratarán, a su cargo, la inspección técnica de las obras”.

En cuanto a las funciones de las entidades encargadas de la asistencia técnica y social de los proyectos, el N° 4.4 del artículo 1 dispone “4.4 Gestión Legal y Administrativa del Proyecto, que comprende el desarrollo y/o ejecución de todas las actividades de índole jurídico y/o administrativo que



considera la fase de postulación del proyecto al Banco de Proyectos, así como la ejecución de las obras”.

Precisa el N° 12 del artículo previamente citado, que: “Corresponderá al SERVIU supervisar el desarrollo de los servicios de asistencia técnica y social prestados por la EGIS en el FSV, por el PSAT en el SHR, y por el Prestador de Servicios de Asistencia Técnica en el Programa de Protección del Patrimonio Familiar. El pago de estos servicios se realizará una vez finalizadas las labores correspondientes y aprobadas por el SERVIU”.

Por su parte, el N° 27 del artículo 3 dispone: “Los SERVIU efectuarán directamente la inspección técnica de obras o la contratarán mediante licitación pública. La propuesta privada o el trato directo sólo procederán en los casos previstos en el artículo 8° de la Ley N° 19.886 y en el artículo 10° del D.S. N° 250, de Hacienda, de 2004.” y el N° 37 del mismo artículo que “El SERVIU será responsable de supervisar el desarrollo de la ITO y aprobar los pagos correspondientes. El pago se realizará una vez finalizadas y aprobadas las labores realizadas”.

A su vez, el artículo N° 41.1 indica que la ITO debe cumplir con las siguientes labores: “Inspeccionar la obra, conforme al sistema de medidas de gestión y control de calidad aprobado por el SERVIU para la correcta construcción de las viviendas. Este sistema se aplicará de acuerdo a las características particulares del proyecto y a la metodología establecida en el Manual de Inspección Técnica de Obras, aprobado mediante Decreto Supremo N° 137 (V. y U.), de 1998”.

Finalmente, el N° 41.2 dispone que la ITO deberá visitar las obras, debiendo en estas visitas “constatar la buena ejecución de las obras, de





acuerdo a los planos, especificaciones técnicas aprobadas y a las normas legales y reglamentarias vigentes”.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, referido lo anterior, es dable precisar que constituye falta de servicio la situación que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él. Así, doctrinaria y jurisprudencialmente en los fallos reiterados de la Excma. Corte Suprema, se ha estimado que concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo o cuando funciona de manera irregular o tardíamente.

Al efecto, se ha dicho que “El establecimiento de la falta de servicio como criterio de atribución de responsabilidad implica que el estado no se hace responsable por todo daño que puedan sufrir los ciudadanos producto de su relación con la actividad estatal. Por el contrario, para establecer la responsabilidad se realiza un juicio de carácter comparativo-objetivo entre la actuación del servicio público y un estándar normativo relativo a cómo éste debería haber actuado. El juicio de responsabilidad en realidad atiende al establecimiento de la mala organización o el funcionamiento defectuoso del servicio, apreciando esas nociones en forma objetiva por referencia a lo que se está en derecho exigir de un servicio público moderno, es decir, aquello que debe ser su comportamiento normal” (“La Responsabilidad de la Administración del Estado”, Luis Cordero Vega, segunda edición actualizada, página 191).

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, se ha hecho consistir la falta de servicio imputada a la Municipalidad de La Cisterna en el incumplimiento de las obligaciones que recaen sobre ella como ente encargado de la fiscalización en el cumplimiento de la normativa técnica aplicable a la calidad de la



construcción. En tal sentido, sostienen los actores que el estado actual del edificio daría cuenta por sí solo de tales incumplimientos.

A modo de ejemplo, señalan que la municipalidad ni siquiera cuenta con todos los documentos que dan cuenta de los antecedentes técnicos de la construcción del edificio.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, resulta necesario señalar que si bien tanto la Ley General de Urbanismo y Construcciones como la Ley Orgánica Constitucional de Municipales, entregan a la Dirección de Obras de la Municipalidad la función de dar los permisos de ejecución de obras y de recibirlas una vez finalizadas, lo cierto es que por disposición expresa de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es el Inspector Técnico de Obra quien es responsable de velar porque las obras se ejecuten conforme a las normas de construcción, al permiso aprobado y al proyecto original, y no la municipalidad.

Por otro lado, cabe agregar que la demanda no refiere con precisión en qué habrían consistido los incumplimientos que se imputan a la municipalidad demandada. Así, el único incumplimiento que se le atribuye claramente, consiste en que la municipalidad no contaría con todos los documentos que dan cuenta de los antecedentes técnicos de la construcción del edificio, comportamiento que no es posible vincular de modo alguno a los perjuicios que se reclaman en autos y que sirven de fundamento a la falta de servicio invocada, debiendo desestimarse de plano tal alegación.

Por consiguiente, no se aprecia en los hechos expuestos en la demanda ni en los antecedentes allegados al proceso que exista responsabilidad atribuible a la municipalidad demandada, motivo por el cual la demanda dirigida en su contra deberá ser rechazada.



**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, en cuanto al Serviu Metropolitano, se ha hecho consistir la falta de servicio imputada en que ejerció una deficiente función de fiscalización y supervisión técnica en la construcción del proyecto Edificio Vista Hermosa, lo que se vería reflejado en diversos desperfectos en el edificio, descritos a fojas 9 y 10 de la demanda.

Añaden los actores que “la sola circunstancia de otorgar subsidios habitacionales -con fondos públicos provenientes del erario nacional- imponen al SERVIU Metropolitano la obligación de ejercer un control permanente respecto de su inversión. De haber cumplido dicha obligación, el SERVIU Metropolitano habría evitado -o a lo menos disminuido- las desastrosas consecuencias que han generado en la vida de los demandantes los vicios de construcción materia de esta demanda”.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, cabe reiterar que el proyecto “Edificio Vista Hermosa” se enmarca en el Programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, regulado por el Decreto Supremo N° 174 de 2005 del Minvu, conforme consta en el contrato de construcción del proyecto, documento suscrito con fecha 25 de octubre de 2010 y que fuera acompañado por la parte demandante a fojas 1339.

En tal contexto, el contrato para la construcción del proyecto fue celebrado entre la Entidad de Gestión Inmobiliaria EGIS Creativa, la empresa constructora Broughton Asociados Ltda. y el grupo organizado Comité para la Vivienda “Vista Hermosa”, de acuerdo con la normativa contemplada en el Decreto referido.

Por otro lado, ha de señalarse que el proyecto “Edificio Vista Hermosa” fue aprobado por la Resolución Exenta N° 4.079 de 8 de julio de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica la Resolución Exenta N°



2613 de 2010, asignándose los fondos respectivos para 90 familias, documento acompañado por la parte demandante a fojas 1364.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, de acuerdo con las normas citadas en los motivos 18°, 19° y 20° de este fallo, el demandado Serviú tiene como función materializar los planes que le encomienda el Ministerio de Vivienda y Urbanización, participando: a) en la elaboración y revisión de los modelos de vivienda sociales, las cuales deben consistir en una solución habitacional adecuada para personas de escasos recursos; b) en la supervisión de las especificaciones técnicas de los proyectos, velando por el cumplimiento de los requerimientos establecidos; y c) en la elección y supervisión de los organismos encargados de la ejecución y control de las obras, esto es, del Prestador de Servicios de Asistencia Técnica o de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), según sea el caso, y del Inspector Técnico de Obras (ITO), cuando dicha función no sea ejecutada directamente por el servicio.

□ Que, por su lado, también cabe concluir que tanto la EGIS como la empresa constructora son las entidades responsables de ejecutar los proyectos de viviendas sociales de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada proyecto y con la normativa aplicable, mientras que al ITO le corresponde supervisar y constatar su cumplimiento.

□ **VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, a lo anterior cabe agregar que el contrato para la construcción del proyecto, hace una remisión directa a los reglamentos previamente citados y consagra de manera expresa las obligaciones de la EGIS, la ITO y el Serviú en cuanto al control en la ejecución de las obras, indicando en su cláusula 12° que “Es de responsabilidad del constructor contar con su inspección técnica de la obra, sin perjuicio de la que realice el I.T.O.



designado por el SERVIU respectivo, la que deberá ajustarse a las disposiciones de la resolución N° 533 (V. y U.) de 1997”, agregando que “Es un derecho-deber del Serviu Metropolitano, por medio del ITO que se designe o contrate y de la EGIS inspeccionar y recibir las obras. El constructor se obliga a otorgar todas las facilidades a fin de garantizar el ejercicio de este derecho-deber en tiempo y forma, con el objeto de que se formulen las observaciones y reparos que procedan, y se emitan los informes de Serviu Metropolitano exija o sean necesarios para el fiel cumplimiento de su cometido”.

□ **VIGÉSIMO OCTAVO:** Que, finalmente, es necesario señalar que el Serviu Metropolitano, aunque al contestar la demanda, rechaza la responsabilidad atribuida, reconoce que a su parte le corresponde velar para que el proyecto se cumpla (página 3 de la contestación del Serviu, tercer párrafo).

□ Asimismo, el testigo don Jorge Antonio Catalán Cordero, presentado por el Serviu, reconoce en su declaración que el Supervisor del Serviu es uno de los encargados de velar por el cumplimiento de las bases técnicas y administrativas del contrato de construcción.

□ **VIGÉSIMO NOVENO:** Que, conforme lo que se ha venido razonado, surge de manifiesto que el rol del Serviu no puede limitarse a una supervigilancia formal de la actuación tanto de la EGIS como de la ITO, sino que debe asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones.

Lo anterior se observa con claridad si se atiende a que tales entidades no hacen otra cosa que concretizar una de las funciones que la propia ley entrega al servicio, cual es la de otorgar una solución habitacional adecuada a familias de escasos recursos. Por consiguiente, el estándar de cuidado que corresponde



desplegar al servicio sólo puede satisfacerse si asegura la consecución de dicho fin.

□ En ese mismo sentido, nuestra Corte Suprema a resuelto que “el principio de responsabilidad del Estado en el ejercicio de una función pública cuyo origen se encuentra en la ley, impone al órgano de la Administración del Estado asumir siempre un rol de vigilante o supervisor de la correcta y oportuna prestación de los servicios a los administrados. Esto significa que si el Estado ha delegado o desplazado su tarea pública a los particulares, por medio de un reglamento especial que autoriza la celebración de un contrato de prestación de servicio de asistencia técnica, ello no quiere decir que igualmente no le corresponda, en la especie al SERVIU, la función de fiscalizar que el servicio se lleve a cabo conforme al estándar exigible. Es así como las distintas modalidades y diseños que puedan adoptar los programas habitacionales establecidos reglamentariamente no tienen el efecto de enervar la responsabilidad general establecida por ley que recae en el SERVIU en cuanto a cuidar y atender que el servicio sea correctamente prestado, esto es, velar porque los modelos de viviendas económicas y sociales constituyan una solución habitacional adecuada a las personas con escasos recursos o que se encuentran en situación de marginalidad” (Rol 2024-2014).

□ **TRIGÉSIMO:** Que, por consiguiente, es posible determinar que el Serviu tenía la obligación de supervisar debidamente la actuación de la EGIS Creativa y de la ITO contratada para su control, desplegando un estándar de cuidado que asegurara la ejecución de la obra “Edificio Vista Hermosa” en relación a las especificaciones técnicas del proyecto y a las normas reglamentarias pertinentes.



**TRIGÉSIMO PRIMERO:** Que, establecido lo anterior, corresponde referirse a los defectos y fallas en la construcción del edificio detallados en la demanda.

Al efecto, es dable recordar que en la demanda se indican como defectos en la construcción del edificio los siguientes: a) mala calidad en las instalaciones de ventanas; b) mala calidad en llaves de agua y calefones; c) mala calidad de puertas de exterior y chapas instaladas originalmente; d) tableros de luz sin protección y oxidados por la lluvia; e) grietas en las juntas de dilatación; f) sala de basura en malas condiciones; g) patio del edificio de tierra en desnivel y sin drenaje; h) defectos en las tabiquerías; i) deficiencias en los aleros del techo del edificio; j) problemas de bombas y estanque de agua potable; y k) muros de pasillos en bruto, sin revestimiento.

**TRIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, para efectos de acreditar este punto, los actores acompañaron a fojas 1191, informe preliminar sobre falencias constructivas respecto del proyecto Conjunto Vivienda Social Vista Hermosa, elaborado por la arquitecto doña Lucía Ríos O’Ryan. Al respecto, teniendo presente que dicho documento consiste en un instrumento privado, cuyo autor no compareció en autos reconociendo y ratificando sus dichos, se le restará valor probatorio.

También acompañaron a fojas 1172, informe denominado “Estudio de daños y patologías a Edificio Vista Hermosa”, elaborado por el ingeniero en construcción don Miguel Ángel Zenteno Vivanco, quien además comparece como testigo en estos autos.

Se indica en dicho informe que su alcance consiste en “dar cuenta de los defectos constructivos del edificio “Vista Hermosa” a petición de su



comunidad, y con ello determinar la causa y el origen de dichos defectos para dar un mejor entendimiento de la situación actual”.

En cuanto a las tabaquerías, observa que en “toda la fachada, exceptuando pilares y vigas, se observan muros exteriores con hormigón celular. El hormigón armado se encuentra tope con el hormigón celular, y esto permite que el agua penetre hacia el interior de la vivienda.” Agrega, que “las EETT indican o hacen referencia a que todos los muros exteriores debiesen estar revestidos con Siding, siendo que el edificio no cuenta con ningún tipo de revestimiento, pintura o impermeabilizante exterior. Se observa, ... que posteriormente se inyectó sello entre el Hormigón y el Hormigón Celular, que según lo indicado por los propietarios, dicha solución que fue brindada por la constructora, dejando en evidencia las fallas el proceso constructivo.”

En cuanto a las ventanas del proyecto, se indica que se observa en diferentes departamentos un descuadre de los vanos de las ventanas falta de sello e inexistencia de corta goteras, lo que genera una deficiencia en la aislación térmica al interior de los departamentos y evidente filtración de humedad y agua en caso de lluvia (página 7 del informe, primer párrafo). Se contrasta el estado de las ventanas con las especificaciones técnicas del proyecto y se concluye que existe una evidente deficiencia en el método constructivo empleado, el cual no coincide con lo especificado ni con los requerimientos mínimos ya que no garantiza impermeabilidad (página 8, tercer párrafo).

En cuanto a la falta de evacuación de aguas lluvias, se indica que “la entrada de acceso al primer piso, sector del patio y estacionamientos, no posee la nivelación necesaria para el correcto escurrimiento de las aguas ni tampoco un sistema de drenaje que permita su evacuación, lo que produce acumulación





de aguas que impiden el tránsito, e inundamientos del patio hasta niveles suficientes que permite el ingreso del agua hasta los departamentos del primer piso” (página 9, primer párrafo), situación que tampoco cumple con las especificaciones técnicas indicadas.

En cuanto a los aleros y pasillos, se indica que “debido a que el proyecto original no consideraba aleros, la constructora instaló el alero en el 5° piso, solución precaria para las necesidades de la comunidad. Pues los pasillos se inundaron y los muros exteriores quedan al descubierto, y a esta situación se le suma que los pasillos no poseen la pendiente adecuada para el escurrimiento y evacuación del agua, provocando que entre a los departamentos provocando serios problemas en la calidad de vida de las personas que viven en el edificio” (página 12, primer párrafo).

En cuanto a los sellos en juntas de dilatación, se indica que las juntas “no fueron correctamente tratadas, dejando en evidencia el tratamiento que requieren, ya que el total de juntas del edificio se encuentran al descubierto y a la intemperie” (página 14, primer párrafo). Se agrega acto seguido que tales problemas permiten el escurrimiento de agua desde el último piso a través de la junta de dilatación, afectando a los pasillos de todos los pisos y por consecuencia permitiendo que el agua entre en los departamentos, lo que vuelve imperante que las juntas sean selladas de manera correcta e invisible para la comunidad.

En cuanto a la sala de basura, se indica que se observa “falta de sello entre las juntas de las dos panchas. Lo que provocó filtraciones que tienen a la sala de basura en malas condiciones” (página 16, primer párrafo)

Por último, en cuanto a los empalmes eléctricos, se indica que el empalme actual cumple con la norma eléctrica aplicable.



A partir de lo anterior, se concluye en el informe que, aunque el proyecto cumple en términos generales con la normativa nacional vigente y se rige por especificaciones técnicas, “se observan algunas falencias importantes que no cumplen con las especificaciones técnicas pertinentes ni los requerimientos mínimos de construcción que hoy están afectando a la comunidad en su totalidad”.

Por su parte, a fojas 1203, rolan las especificaciones técnicas del Proyecto Conjunto Vivienda Social “Vista Hermosa”, en las cuales se observa en el punto 4.1.10.3, denominado “Revestimientos Siding Volcán”, que “Se ejecutarán de acuerdo con los planos de arquitectura y construcción, en cuanto a especificación, forma, dimensiones, ubicaciones, tipo y calidad”.

En el punto 4.1.10.5, denominado “Antepechos y muros de Hormigón Celular”, se señala que “En pasillos comunes, se ejecutarán de hormigón celular de acuerdo con los planos de arquitectura y construcción, en cuanto a especificación, forma, dimensiones, ubicaciones, tipo y calidad”.

En el punto 4.2.1, denominado “Aislación Término de Muros Siding”, se señala “Se consulta para el asilamiento término de muro, entre el revestimiento exterior de siding y la volcánita de 15 mn, una capa de aislán glass de 50 mm. y 40 Kl/m<sup>3</sup>, colocada en forma continua, sin dejar espacios, según plano arquitectura escantillón D02; B02.

En el punto 4.2.3, denominado “Impermeabilización muros exteriores”, se indica “se consulta en muros y machones exteriores de hormigón armado, impermeabilización hidrófugo Sika 1, este garantizado 5 años”.

Que la parte demandante también contó sobre el punto con la testimonial de los testigos don Miguel Ángel Ibarra Cuellar y don Julio César Riversa Gutiérrez, quienes, en términos generales, indican que cuando hay



lluvia, los departamentos se llueven y se acumula agua en los espacios comunes del primer piso del edificio.

Al respecto, cabe indicar que, atendido las características técnicas del punto a probar, tales declaraciones carecen de la calificación y precisión necesaria para dar cuenta por si mismas de los defectos en la construcción de que se trata, debiendo desestimarse su valor probatorio al efecto. Sin perjuicio de lo anterior, tales declaraciones permiten acreditar que en periodos de lluvia se inundan los departamentos y el edificio.

Finalmente, en cuanto a la alegación del Serviu Metropolitano consistente en que los problemas de construcción fueron provocados por la propia comunidad del edificio “toda vez que las viviendas sociales se entregan sin baldosas y con un fin estético, realizaron la instalación de baldosas en zonas comunes y lo hicieron en desnivel adecuado provocando dicho acto inundaciones. La misma situación ocurre con copa de agua que fue afectada por los vecinos toda vez que la dañaron con los vehículos al ocupar esa zona como estacionamiento” será desestimada, al no rendir prueba en orden a acreditar dicha afirmación.

**TRIGÉSIMO TERCERO:** Que, de acuerdo con lo expuesto, analizada la prueba referida conforme lo que establecen los artículos 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, se ha acreditado en autos la existencia de los siguientes defectos en la construcción del edificio Vista Hermosa: a) en las tabiquerías; b) mala calidad en las instalaciones de ventanas; c) grietas en las juntas de dilatación; d) sala de basura en malas condiciones; e) patio del edificio de tierra en desnivel y sin drenaje; y f) deficiencias en los aleros del edificio.



Por su parte, también se ha acreditado que la mala calidad y falencias en las instalaciones de tabiquería, ventanas, las grietas en los sellos y junta de dilatación, y las deficiencias en los aleros del techo y pasillos, provocan que, cuando acaecen precipitaciones, existan filtraciones y escurrimiento de agua hacia los departamentos.

A su turno, se ha acreditado que el patio del edificio se encuentra en desnivel y tiene problemas de drenaje, lo que genera gran acumulación de agua en el primer nivel del edificio.

Por último, y conforme lo descrito en el informe, se ha acreditado que los defectos y falencias mencionados son consecuencia de la falta de cumplimiento en la construcción del edificio con las especificaciones técnicas del proyecto y con los requerimientos mínimos de construcción, atendida la normativa sectorial aplicable.

**TRIGÉSIMO CUARTO:** Que, correspondía al Servicio acreditar que cumplió con el estándar de cuidado debido, que no era otro que fiscalizar de forma suficiente las actuaciones de la EGIS encargada de la obra y de la ITO contratada para su control, conforme lo razonado en el motivo 30° de este fallo, de modo que, al no haber probado el modo en que habría observado dicho estándar, resultará forzoso concluir que no cumplió con la obligación a la que se ha venido haciendo referencia, configurándose la falta de servicio alegada en la demanda.

**TRIGÉSIMO QUINTO:** Que establecida la responsabilidad que le cabe al demandado, habrá de emitirse pronunciamiento respecto de las peticiones de indemnización.



Que, en primer término, es necesario determinar si los actores se encontraban en posición de solicitar las indemnizaciones demandadas en autos, esto es, si son legitimarios activos en razón de los daños demandados.

En cuanto a la demandante Condominio Vista Hermosa, como comunidad de los bienes comunes del edificio, cuenta con legitimidad activa para solicitar la indemnización de los perjuicios que se acrediten sobre tales bienes.

En cuanto a los demás demandantes, para efectos de acreditar su calidad de dueños de departamentos y residentes del edificio, acompañaron copia de las inscripciones de dominio de los departamentos y de certificados de residencia que dan cuenta de que tales inmuebles se corresponden con su domicilio, documentos que se encuentran individualizados en el motivo 3° con los números 11 a 75 y 80, y en el motivo 10° con los números 1 y 2.

Que, analizados tales documentos conforme lo dispuesto en los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil, se tiene por acreditado que los demandantes son propietarios de departamentos ubicados en el edificio Vista Hermosa y residentes actuales del condominio, con excepción de los siguientes demandantes, quienes no acompañaron los documentos referidos y respecto de los cuales la demanda deberá ser desestimada: doña María Cecilia Labarca González, doña Elena Albina Cancino Lizama, doña Adriana Beatriz Juárez Carrillo, doña Ana Luisa Campos Poblete, doña Marcela Melania del Carmen Palacios Henríquez, doña María Teresa Abarca González, doña Sandra María Agurto Cordero, Claudia Elizabeth Barraza Olmos y doña Carolina Bersezio Arancibia.

**TRIGÉSIMO SEXTO:** Que, los demandantes solicitan primeramente indemnización de perjuicios por concepto del daño material sufrido por cada



departamento, el que avalúan en la suma de 20% del precio de cada una de las viviendas.

Precisan en tal sentido que el valor total de cada uno de los departamentos por familia ascendió a la suma de 710 UF, por lo que el 20% solicitado alcanza la cifra de 142 UF, que equivale a \$3.738.761.- al día 9 de diciembre de 2016, fecha de presentación de la demanda.

Que los actores no se refirieron en la demanda al daño sufrido directamente por cada uno de los departamentos, ni rindieron prueba alguna dirigida a acreditar la existencia de dicho daño, motivo por el cual no existen en autos antecedentes suficientes para realizar un pronunciamiento en cuanto a los montos de indemnización solicitados, debiendo desestimarse la demanda en este punto.

**TRIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, adicionalmente, la demandante Condominio Vista Hermosa, solicita la indemnización de los gastos que como comunidad han debido soportar para efectos de realizar reparaciones al edificio y a espacios comunes, los que evalúan en la suma de \$8.635.207.-

Para efectos de acreditar tales perjuicios, se valió de prueba documental, que se encuentra custodiada en las dependencias del tribunal bajo el N° 7866-2016, consistente en:

-Comprobante de egreso de Condominio Vista Hermosa de fecha 31 de marzo de 2015, por la suma de \$560.000.-, por concepto de “pago maestro trabajo en las escalas cerámicas”. Al efecto, teniendo presente que no existe modo de determinar que el trabajo que se indica guarde relación con los defectos en la construcción del edificio respecto de los cuales el Serviu es responsable, se le restará valor probatorio a dicho documento.



-Boleta de ventas y servicios N° 192283 de Cerámicas Alvarado Ltda. de fecha 4 de junio de 2014, por la suma de \$255.440.-, documento que tampoco cuenta con datos suficientes para poder vincularlo a los defectos de la construcción acreditados, por lo que se le restará valor probatorio.

-Factura electrónica N° 0011100549, de Construmart, de fecha 14 de febrero de 2015, por la suma de \$973.531.-, documento que tampoco cuenta con datos suficientes para poder vincularlo a los defectos de que se trata en estos autos, por lo que se le restará valor probatorio.

-Copia de depósito Banco de Chile a Melón Áridos Ltda., de fecha 20 de junio de 2014, por la suma de \$247.520.-, documento que una vez más no es posible vincular con los defectos acreditados, por lo que se le restará valor

-Boleta de ventas y servicios N° 0157951 de Cerámicas Alvarado Ltda., de fecha 08 de noviembre de 2012, por la suma de \$2.200.000.- Dicho documento tampoco cuenta con antecedentes que permitan vincularlo a los defectos acreditados en autos, sumado a que es de una fecha anterior a aquella que indica en la demanda como época en la cual se habrían manifestado los daños en el edificio (junio de 2013), motivo por el cual se le restará valor probatorio.

-Guía de despacho electrónica N° 031752212 de Sodimac S.A de fecha 20 de noviembre de 2012, por la suma de \$494.390.-, documento al que también se le restará valor probatorio por ser anterior a la fecha en que se habrían manifestado los daños, conforme lo alegado en la demanda.

-Contratos de prestación de servicios de fecha 14 de noviembre de 2012 y 23 de octubre de 2012, documentos a los que también se les restará valor probatorio por corresponder a trabajos anteriores a la fecha en que se habrían manifestado los daños.



-Por último, comprobante de egreso de Condominio Vista Hermosa de fecha 10 de octubre de 2015 por la suma de \$290.000.-, por concepto de pago de trabajos de reparación de filtración de agua en departamento N° 523 hasta departamento N° 111, sumado a presupuesto de reparación por la misma suma. Teniendo presente que, conforme la descripción del presupuesto y del comprobante de pago, los trabajos referidos guardan relación con los defectos de que se ha tratado en estos autos, se dará valor probatorio al documento.

Atendido lo expuesto y analizados los documentos referidos conforme lo prescrito en el artículo 346 el Código de Procedimiento Civil, se tendrá por acreditado que la Comunidad del Edificio Vista Hermosa pagó por concepto de reparación de los desperfectos del edificio, la suma de \$290.000, monto que deberá ser indemnización por el servicio demandado a título de daño emergente.

**TRIGÉSIMO OCTAVO:** Que el monto de la indemnización del daño emergente deberá reajustarse de conformidad a la variación que experimente el I.P.C. desde la fecha del comprobante de egreso que le sirvió de prueba, esto es, desde el 10 de octubre del 2015, hasta su pago efectivo.

**TRIGÉSIMO NOVENO:** Que, por último, los demandantes solicitan, por concepto de daño moral, la suma de 300 UF para cada una de las familias, representadas por los dueños de los departamentos, suma que al día de presentación de la demanda alcanza el valor de \$7.898.790.-

Hacen consistir el daño moral alegado en que la mala construcción y la mala publicidad que tiene el Condominio Vista Hermosa a raíz de aparecer en distintos programas de televisión ha producido un gran malestar y vergüenza en los vecinos del edificio.





Agregan que la inadecuada e ineficiente construcción del bien máspreciado, que se supone es para toda la vida, y del cual se lucha por obtener a fin de asegurar a su familia e hijos, les genera dolor de pena, rabia, frustración, desesperación, desaliento, abandono y humillación, entre otros sentimientos.

**CUADRAGÉSIMO:** Que cabe señalar que el daño moral puede definirse como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida.

Para ello, resulta necesario tener presente que, a pesar de su naturaleza particular, el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, de manera que aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

Así, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

**CUADRAGÉSIMO PRIMERO:** Que, en cuanto al daño moral consistente en que la mala publicidad de la construcción ha producido malestar y vergüenza a los vecinos, atendido que no se ha rendido prueba que dé cuenta de esta situación respecto de los demandantes, habrá de rechazarse el daño moral solicitado por este concepto.

**CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:** Que, en cuanto al daño moral consistente en la aflicción provocada por la mala construcción del edificio y sus consecuencias, la parte demandante se vale de prueba documental y de prueba testimonial para acreditarlo.



En cuanto a la prueba documental, los actores acompañaron a fojas 1231 copia de informe psicológico emitido por la psicóloga doña Flor Gutiérrez Valdés, quien declaró como testigo en autos, refiriéndose al informe realizado y reiterando sus conclusiones.

□ En dicho informe se indica que con fecha 28 de mayo de 2018, la profesional atendió y evaluó a un grupo de residentes del Edificio Vista Hermosa, individualizando a un grupo de 42 de los demandantes de autos.

□ Señala que los pacientes singularizados fueron atendidos clínicamente con motivo de sintomatología depresiva y angustiosa como reacción a los problemas que han debido enfrentar en sus viviendas producto de la mala calidad de la construcción del Edificio Vista Hermosa (página 3 del informe, primer párrafo).

Se relata en el informe que la reunión se desarrolla inicialmente con toda la comunidad asistente reunida donde se entregan los lineamientos generales de comunicación y forma de abordaje para la formulación del caso clínico, para luego llevar a cabo de forma grupal e individual diversas actividades, con el objeto de conocer con mayor profundidad la experiencia subjetiva de la comunidad formada a partir del motivo de consulta.

Se añade que “a partir de las sesiones se desprende en términos generales, que la comunidad residente del Edificio Vista Hermosa se encuentra bajo excesiva tensión psíquica y mucho sufrimiento por la mala calidad del inmueble y las consecuencias derivadas de ésta, que no han cesado desde la fecha en que recibieron su domicilio.

De acuerdo con lo señalado por ellos, desde que se reciben sus viviendas en el año 2012, que se han visto muy afectados como grupo, en sus relaciones vecinales, al interior de la comunidad, en sus familias, en sus



interacciones sociales, y en sus estados psicológicos individuales, llegando incluso a presentar síntomas físicos que les afecta en las distintas áreas de funcionamiento cotidiano. Refieren que sus departamentos fueron adquiridos con la expectativa de cubrir de manera digna su necesidad de vivienda, siendo uno de los pilares fundamentales a la hora de constituir su núcleo familiar y social, sin embargo, por los diversos problemas en la calidad de la construcción y las consecuencias económicas y de convivencia que se desprenden, se ha venido a configurar el motivo angular de sus problemas” (página 3 del informe, tercer, cuarto y quinto párrafo).

Luego, se realiza una descripción pormenorizada de la situación y sintomatología de cada uno de los demandantes individualizados en el informe.

Se concluye en el informe que “Ante lo antecedentes expuestos precedentemente sobre cada una de las familias residentes del Edificio Vista Hermosa y la dinámica de la comunidad, es que se hace necesario exponer los perjuicios provocados en los distintos ámbitos de la vida personal, familiar, social, laboral, así como el funcionamiento comunitario, por parte de la empresa constructora y todos quienes resulten responsables de causar dificultades constantes en el diario vivir, así como gran malestar psicológico y consecuencias físicas a modo de dilucidar una forma compensatoria de lo sucedido para permitirles procesar de mejor manera los sucedido y mejorar así sus condiciones de vida.

Toda la comunidad concuerda que tras la entrega de sus viviendas la empresa no ha respondido de forma adecuada a las necesidades mínimas mejoramientos que se requiere en la comunidad Vista Hermosa, que se han



visto afectados en su diario vivir por esto y se han sentido pasados a llevar en su dignidad como personas.

La evidencia psicológica indica que toda la comunidad se encuentra en un estado de profundo malestar con consecuencias tanto psíquicas como físicas que impactan en la vida de cada uno de ellos y en las relaciones que establecen entre ellos y con su entorno” (página 19 del informe, primer, segundo y tercer párrafo).

Por último, se señala que todos los residentes dan cuenta de trastorno y/o síntomas depresivos y angustiosos, siendo “evidente que las malas condiciones estructurales, de revestimientos y terminaciones del Edificio Vista Hermosa especificadas en este informe constituyen un factor causal directo para el desarrollo de los síntomas que presentan los pacientes” (página 19 del informe, primer, quinto párrafo).

Por su lado, los 42 demandantes respecto de los cuales se evacuó el informe previamente reseñado, acreditaron en autos ser propietarios de departamentos y ser residentes del proyecto, conforme lo indicado en el motivo 35° de este fallo.

Finalmente, en cuanto a la prueba testimonial, los testigos don Miguel Ángel Ibarra Cuellar y don Julio César Riversa Gutiérrez indican que existiría daño moral sufrido en general por los habitantes del edificio, pero no se refieren de forma específica a ninguno de los demandantes. Así, don Julio César Riversa Gutiérrez, sólo se refiere a don “Juan Cerda”, persona que no reviste la calidad de parte en estos autos, mientras que el testigo don Miguel Ángel Ibarra Cuellar no nombra directamente a ninguna persona. Por lo anterior, no será posible dotar a tales declaraciones de valor probatorio en este punto.



Que, conforme lo expresado y ponderada la prueba reseñada de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 348 y 384 del Código de Procedimiento Civil, habrá de darse por establecido el sufrimiento y aflicción que, producto de los defectos en la construcción del edificio y sus consecuencias, sufrieron los demandantes respecto de los cuales se evacuó en autos un informe psicológico, esto es: Teresita Jesús Corro Rojo, Marjorie Vania Arenas Fredes, Marizzella Luisa Galleguillos Martínez, Luz Eliana Contreras Valdivia, Lucila del Carmen Campos De La Fuente, Paola Alejandra Carrasco Vergara, Carolina Muñoz Moya, María Antonieta Huircal Trangolaf, Alicia Julia Lizama Fuentes, Carolina Del Carmen Clavel Azar, Katherine Soledad Carrasco Vergara, Valeska Andrea Carrasco Vergara, Constanza Carolina Yáñez Muñoz, Carol Gloria Cáceres Padilla, Viviana Del Pilar Cáceres Padilla, Rosa Karen Inzunza Vejar, María Elizabeth Núñez Martínez, Viviana Elizabeth Miranda Herrera, Mirta Del Carmen Carvajal Droguett, Carmen Gutiérrez Castro, María José Cardoza Cardoza, Iris Del Carmen Rojas Reyes, Sara Irene Chacón Valladares, Andrea Paulina Gatica Díaz, Gloria Adela Betzabé Aguilar Olivares, Romina Jeannette Vergara Carrasco, Paola Andrea Llorente Bahamondez, Jocelyn Vanessa Catrinanco Martínez, Mónica Isabel Martínez Salas, Silvia Vanessa Vera Henríquez, Marlene Del Carmen González Paredes, Verónica Del Carmen Gutiérrez Castro, María Inés De Las Mercedes Sandoval Otárola, Rosa Elena Vargas Flores, Jessica Ivonne Vargas Vargas, Nadia Jeannette Vergara Ávalos, Jorge Alonso Villalobos Cornejo, Marcela Andrea Morales Aguirre, Gladys Del Carmen Valverde Aroca, Verónica De Los Ángeles Cáceres Padilla, María Marcela Vives Valdés y Evelyn Andrea Matus Jiménez.



Que respecto de los demás demandantes, no se dará lugar al daño moral por falta de prueba.

**CUADRAGÉSIMO TERCERO:** Que, establecida la existencia del daño moral en los términos señalados, ha de determinarse el quantum de la indemnización, cuestión que no es otra que la traducción económica de los perjuicios extrapatrimoniales y que se ve reflejada en una suma de dinero, de carácter compensatoria que tiene por objetivo el paliar los sufrimientos inmateriales provocados por la falta de servicio.

Es en este contexto y en base a los elementos que constan en el proceso, que el quantum de la indemnización por daño moral se fija en la suma de \$6.000.000 para cada uno de los demandantes referidos en el motivo precedente.

**CUADRAGÉSIMO CUARTO:** Que, en lo referente a la reajustabilidad, la suma señalada por concepto de daño moral se reajustará de acuerdo a la variación que experimente el I.P.C., desde el día en que la presente sentencia quede ejecutoriada hasta el momento del pago efectivo, por cuanto el daño moral es evaluado por el juez en la sentencia, de ahí que las perniciosas consecuencias de la desvalorización monetaria, sólo pueden empezar a producirse desde la fecha de la sentencia que regula el daño moral.

**CUADRAGÉSIMO QUINTO:** Que, por último, respecto de los intereses, las sumas contempladas en lo resolutivo del fallo devengarán el interés corriente desde la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, hasta la época de su pago efectivo.

☐ **CUADRAGÉSIMO SEXTO:** Que el resto de la prueba rendida y no pormenorizada no altera el tenor de lo previamente concluido.



Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346, 383, 384 y 426 del Código de Procedimiento Civil, artículos 1511, 1698, 1702, 1712, 2314, 2332, 2503, 2514, 2515, 2518 y 2519 del Código Civil, Constitución Política de La República, Ley 18.575 o Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, DFL N° 458 o Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley N° 18.695 o Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Decreto Ley N° 1305 de 1975, Decreto Supremo N° 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Decreto Supremo N° 174 de 2005 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, **se declara:**

□**I.-** Que se acoge parcialmente la demanda, sólo en cuanto se condena a la demandada Serviu Metropolitano a pagar a la demandante Condominio Vista Hermosa, por concepto de daño emergente, la suma de \$290.000.-, y a los demandantes Teresita Jesús Corro Rojo, Marjorie Vania Arenas Fredes, Marizzella Luisa Galleguillos Martínez, Luz Eliana Contreras Valdivia, Lucila Del Carmen Campos De La Fuente, Paola Alejandra Carrasco Vergara, Carolina Muñoz Moya, María Antonieta Huircal Trangolaf, Alicia Julia Lizama Fuentes, Carolina Del Carmen Clavel Azar, Katherine Soledad Carrasco Vergara, Valeska Andrea Carrasco Vergara, Constanza Carolina Yáñez Muñoz, Carol Gloria Cáceres Padilla, Viviana Del Pilar Cáceres Padilla, Rosa Karen Inzunza Vejar, María Elizabeth Núñez Martínez, Viviana Elizabeth Miranda Herrera, Mirta Del Carmen Carvajal Droguett, Carmen Gutiérrez Castro, María José Cardoza Cardoza, Iris Del Carmen Rojas Reyes, Sara Irene Chacón Valladares, Andrea Paulina Gatica Díaz, Gloria Adela Betzabé Aguilar Olivares, Romina Jeannette Vergara Carrasco, Paola Andrea Llorente Bahamondez, Jocelyn Vanessa Catrinanco Martínez, Mónica Isabel



Martínez Salas, Silvia Vanessa Vera Henríquez, Marlene Del Carmen González Paredes, Verónica Del Carmen Gutiérrez Castro, María Inés De Las Mercedes Sandoval Otárola, Rosa Elena Vargas Flores, Jessica Ivonne Vargas Vargas, Nadia Jeannette Vergara Ávalos, Jorge Alonso Villalobos Cornejo, Marcela Andrea Morales Aguirre, Gladys Del Carmen Valverde Aroca, Verónica De Los Ángeles Cáceres Padilla, María Marcela Vives Valdés y Evelyn Andrea Matus Jiménez, por concepto de daño moral, la suma de \$6.000.000 a cada uno de ellos.

☐ **II.-** Que las sumas antes indicadas se reajustarán y devengarán intereses conforme lo indicado en los motivos 38°, 44° y 45° de este fallo.

☐ **III.-** Que se rechaza la demanda respecto de los demás demandantes.

**IV.-** Que se rechaza la demanda dirigida en contra de la Municipalidad de la Cisterna.

☐ **V.-** Que cada parte soportará sus costas.

☐ Regístrese y archívese.

☐ Pronunciada por María Soledad Jorquera Binner, Juez Titular.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, seis de Mayo de dos mil veintiuno.**

